

**MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA CON EL QUE INICIA EL
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
PARA EL SECTOR PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2027.**

Santiago, 30 de septiembre de 2026.

MENSAJE N° / 180

**A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADAS Y
DIPUTADOS.**

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración el proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2027.

**I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
DE LEY**

El presente proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público del año 2027 es el primer presupuesto de nuestra administración.

Con él, se busca responder al propósito y deber primordial de este Gobierno consistente en atender las necesidades y urgencias de la población. Las necesidades son múltiples, diversas y legítimas. Sin embargo, los recursos son limitados. Además, en los últimos años las finanzas públicas han enfrentado exigencias superiores a su capacidad. Por ello, es indispensable mantener un equilibrio fiscal que permita enfrentar de manera responsable los compromisos asumidos en el pasado y aquellos que se quieran adoptar en el futuro.





Gobernar exige priorizar y ser responsable en el uso, cuidado y asignación de los recursos fiscales, para que lleguen a las personas que más lo necesitan, de manera eficiente y eficaz.

Es por eso que, este presupuesto, conforme a lo comprometido en el programa de gobierno y por las razones antes señaladas, se estructura en torno a tres prioridades: niñez; seguridad; y empleo y reactivación económica.

II. PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO

1. Empleo y reactivación económica

El crecimiento económico y la generación de empleo son fundamentales para fortalecer los ingresos de las familias y la capacidad financiera del Estado. Por eso, este presupuesto destina recursos a iniciativas públicas que priorizan la creación de puestos de trabajo mientras avanzan las reformas de largo plazo. Esta prioridad también se refleja en las iniciativas que se han impulsado para destrabar la inversión y fortalecer el mercado de capitales.

2. Seguridad

El Presupuesto respalda el fortalecimiento de la seguridad mediante una mayor coordinación entre las instituciones estatales, el refuerzo de sus capacidades operativas y uso de tecnología. Los recursos se destinan prioritariamente a las instituciones vinculadas a la prevención y persecución del delito, el control fronterizo y el sistema penitenciario, con énfasis en la eficacia y coordinación de la acción estatal.



3. Niñez y protección de beneficios sociales

La niñez es una prioridad transversal del Presupuesto del año 2027. Los recursos se destinan a fortalecer su protección y bienestar, apoyar a las familias y mejorar la coordinación de los servicios que intervienen en esta materia, privilegiando políticas cuyo diseño y resultados puedan ser evaluados.

Este presupuesto resguarda los beneficios sociales establecidos por ley, como la PGU, y busca que cada peso del gasto social llegue a quien corresponde.

III. PRINCIPIOS ORDENADORES: HACIA UNA GESTIÓN FISCAL SOSTENIBLE

En 12 de los últimos 13 años, las finanzas públicas han registrado balances deficitarios, con cifras que van desde 0,6% del PIB en 2013 hasta 7,7% del PIB en 2021, año marcado por un significativo impulso fiscal en respuesta a la crisis provocada por la pandemia. La acumulación de estos déficits ha aumentado la deuda pública y el gasto en intereses. En 2025, el pago de intereses equivalió a más del 70% del gasto en la Pensión Garantizada Universal. La persistencia de déficits fiscales en el tiempo continuaría elevando el nivel de endeudamiento y el gasto por intereses, reduciendo el espacio disponible para financiar beneficios sociales y trasladando mayores obligaciones fiscales hacia las futuras generaciones.

Lograr cambiar este rumbo no es una tarea fácil ni rápida. Por el contrario requiere de constancia, rigurosidad y sacrificio. La decisión fue no seguir ocultando los problemas o postergar las decisiones difíciles, sino que



transparencia y honestidad enfrentar las dificultades y actuar en consecuencia.

Asimismo, este proyecto refleja un compromiso con la prudencia fiscal y la transparencia con la población, lo que exige informar con claridad como se financiará cada nuevo beneficio que se entregue, precisando si se recurrirá a ingresos fiscales o a deuda. Aunque esto pueda parecer evidente, no siempre se ha comunicado con suficiente claridad, lo que ha sido un factor relevante para la situación fiscal en la que se encuentra actualmente el Estado.

Para dar respuesta a las necesidades de las personas, hoy y en el futuro, es imprescindible una gestión fiscal sostenible. Esto exige ordenar el gasto, planificar a mediano plazo, mantener la deuda en niveles prudentes, asegurar que los compromisos asumidos puedan financiarse en el largo plazo y recuperar las arcas fiscales para enfrentar de mejor manera emergencias, catástrofes, pandemias y un escenario geopolítico desafiante.

La sostenibilidad fiscal no es un objetivo en sí mismo. Se trata de una condición habilitante para proteger estas prioridades sociales en el tiempo, tanto las actuales como las futuras. Por eso, las decisiones presupuestarias deben conciliar las necesidades actuales con la capacidad futura del Estado y orientar adecuadamente los recursos públicos.

Con este propósito, la formulación de este presupuesto se sustenta en los siguientes principios:

1. Programación de mediano plazo para un mejor uso de los recursos

Se incorpora una nueva forma de planificar el gasto público: la programación financiera de mediano plazo. De esta manera,



a partir de la formulación del presupuesto para el año 2027 se cambia el enfoque a una planificación plurianual, que consiste en que la proyección de las necesidades de gasto se realiza para un horizonte de cinco años, siendo el presupuesto del año 2027 la expresión concreta de esa planificación para este año, pero sin perder de vista que se inserta en una visión de mediano plazo.

Esta herramienta permite anticipar presiones de gasto, ordenar prioridades, gestionar proyectos que requieren horizontes largos de formulación y evaluar si los efectos de las decisiones son sostenibles en el futuro. Asimismo, este nuevo enfoque permite que las autoridades sectoriales puedan planificar sus iniciativas y las coordinen con las prioridades del programa de Gobierno. Con ello, se promueve una formulación presupuestaria que vincule las decisiones de corto plazo con los objetivos de largo plazo del Estado.

2. Equidad intergeneracional, gestión fiscal sostenible para las nuevas generaciones

Las decisiones presupuestarias presentes condicionan los recursos disponibles para las futuras generaciones. Por ello, la responsabilidad fiscal exige equilibrar las necesidades actuales con la capacidad futura del Estado y evitar que el financiamiento de compromisos permanentes con deuda aumente el gasto en intereses y limite el espacio disponible para nuevas prioridades. Responder a las personas hoy no debe significar reducir la capacidad de responderles mañana.

3. Decisiones en base a evidencia para mejorar las políticas públicas y la asignación de recursos

Para mejorar la calidad del gasto es necesario saber si los programas y políticas



públicas están logrando los resultados que se esperan y si los recursos están llegando a quienes más los necesitan.

El sistema de monitoreo y evaluación aporta evidencia respecto del diseño y desempeño de los programas públicos, e identifica aspectos que requieren mejoras. Dicha información permite ajustar y priorizar las decisiones presupuestarias.

El desafío es profundizar la incidencia de la evidencia evaluativa (diseño y desempeño) en la toma de decisiones, tanto respecto de las definiciones de políticas y programas públicos como en la asignación eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, asignar los beneficios del Estado de manera justa y eficiente y aumentar su impacto en las personas. A su vez, se deben mejorar el uso de los datos administrativos para fortalecer la rendición de cuentas.

4. Asegurar la provisión de bienes, servicios y programas sociales a las familias

Planificar, evaluar y asignar mejor los recursos tiene un propósito concreto: asegurar la continuidad de los bienes, servicios y programas sociales que recibe la población. La revisión del gasto permite desplazar recursos desde usos menos prioritarios o efectivos hacia prestaciones que respondan directamente a las necesidades de las personas, resguardando su sostenibilidad en el tiempo.

IV. FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES Y SOSTENIBLES



1. El Presupuesto respeta las metas fiscales establecida en el decreto de política fiscal

El presupuesto 2027 ha sido elaborado de manera consistente con la meta fiscal establecida en el decreto N° 486 de 2026 del Ministerio de Hacienda, que Establece bases de la política fiscal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 20.128 sobre responsabilidad fiscal, que fija un déficit estructural equivalente a 1,8% del PIB. Esta meta representa una mejora de un punto porcentual respecto de la meta de 2,8% vigente para el presente año, señal del compromiso de esta administración con la responsabilidad fiscal y con el ordenamiento de las cuentas públicas.

2. El Presupuesto es responsable fiscalmente

La responsabilidad fiscal exige que cada decisión de gasto cuente con un financiamiento sostenible en el tiempo. Por ello, este presupuesto combina planificación de mediano plazo, una revisión exigente de las prioridades y el uso de evidencia para asignar mejor los recursos públicos. De esta forma, el Presupuesto 2027 no es un ejercicio aislado, sino que se inserta en un marco fiscal que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.

3. El Presupuesto permite estabilizar la deuda pública en niveles prudentes

Este Presupuesto es consistente con una trayectoria que permita estabilizar la deuda pública como porcentaje del PIB en el mediano plazo. Cuidar la deuda no es un fin en sí mismo. Disminuir el pago de intereses permite contar con más recursos para las necesidades de las personas. Una deuda acotada también amplía el espacio de reacción del Estado ante futuras



contingencias, como shocks económicos, desastres naturales u otras emergencias.

V. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El artículo 1 contiene el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, que consolida los presupuestos de ingresos y gastos del Fisco y de los servicios e instituciones regidos por el decreto ley N°1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado. El total neto asciende a \$105.812.552.595 miles y US\$6.297.174 miles.

El artículo 2 autoriza al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan las empresas del Sector Público y las universidades estatales, hasta por la cantidad de US\$500.000.000, o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. Se regula la forma de ejercer esta facultad, y la extensión de la garantía que se puede otorgar, pudiendo incluir requisitos de información u otros que deberán cumplir mientras se encuentren vigentes tales obligaciones. Asimismo, para las referidas empresas se establece un deber de suscribir, previamente y cuando corresponda, un convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas Públicas de la Corporación de Fomento de la Producción, con el objeto de que el Gobierno cuente con una instancia de análisis y evaluación uniforme de la gestión y del desarrollo de los planes y las políticas de estas empresas. Además, se autoriza la contratación de empréstitos por parte de las universidades estatales, fijando reglas específicas sobre los períodos de éstos, nivel del stock del endeudamiento en relación con los respectivos patrimonios, y servicio de la



deuda. Tales empréstitos no comprometerán de ninguna forma el crédito y responsabilidad financiera del Estado. Se reduce la respuesta por parte del Ministerio de Hacienda de noventa a sesenta días corridos, a contar de la recepción conforme de los respectivos antecedentes. Además, se sustituye el deber de llamar a propuesta pública, por el de presentar tres cotizaciones.

El artículo 3 tiene como propósito autorizar al Presidente de la República para contraer, hasta por el monto que se señala, obligaciones en el exterior o en el país por concepto de endeudamiento, el que incluye amortizaciones e intereses de la deuda fiscal y que se incorpora en los Ingresos Generales de la Nación.

En el artículo 4 se establecen limitaciones al gasto, consignando que sólo en virtud de una ley podrá incrementarse la suma de determinados conceptos de gastos corrientes. Igual autorización se requerirá respecto de gastos para adquirir activos no financieros, iniciativas de inversión y transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en esta ley para esos fines, sin perjuicio de las excepciones o exclusiones que establece el mismo artículo. Con ello, se da cumplimiento al inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N°1.263, de 1975, que establece que corresponde fijar en la ley de Presupuestos limitaciones al gasto y las exclusiones y autorizaciones de su variación que procedan. Así, el inciso tercero perfecciona las limitaciones del nivel de gasto, disponiendo que aquel monto en que se disminuya la suma determinada conforme al inciso primero de esta disposición (gasto corriente), para incrementar las cantidades a que se refiere este inciso (gasto de capital), constituirá una reducción definitiva del nivel



autorizado en el citado inciso primero. Finalmente, este artículo contempla una regla de uso del Fondo de Estabilización Económica y Social, estableciendo el requisito de autorización legal, cuando su uso supere el porcentaje del Producto Interno Bruto que se indica.

El artículo 5 establece un mecanismo de control de las dotaciones de personal para evitar el aumento de ellas en los servicios públicos, sin respaldo presupuestario permanente. Para ello, se suspende por el año 2027, la facultad otorgada en la letra d) del artículo 87 del Estatuto Administrativo, en lo referido a la compatibilidad de cargos de planta con empleos a contrata, dejando exceptuados a quienes estuvieren en esa condición al momento de la publicación de esta ley de Presupuestos.

El artículo 6 regula los procedimientos de licitación a que estarán afectos los servicios públicos para adjudicar durante el año 2027, respecto de los proyectos y programas de inversión y los estudios básicos, distinguiendo, con relación a sus montos, la utilización de licitación pública o privada. Se establecen también exigencias destinadas a asegurar el respeto de las leyes laborales y previsionales durante la ejecución de la obra o prestación de servicios financiados con recursos fiscales, se precisa que los incumplimientos detectados durante la ejecución contractual se entienden sin perjuicio del ejercicio de facultades de retención y pago por subrogación. Asimismo, el artículo consagra la obligatoriedad para las empresas e instituciones privadas de acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración en el momento de contratar con el Estado.

El artículo 7 tiene como objetivo resguardar el interés fiscal, al facultar a



la autoridad correspondiente para que, en los decretos que contengan transferencias de recursos, se puedan incorporar condiciones de uso o destino de éstos e información periódica sobre su aplicación y reintegros cuando corresponda. El inciso final impide que, con las transferencias que constituyan asignaciones globales a unidades de un servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, se destinen recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, excepto aquellos que estén expresamente autorizados en el respectivo presupuesto, en cuyo caso el personal contratado no formará parte de la dotación del respectivo servicio.

El artículo 8 establece la obligación de efectuar pagos mediante transferencia electrónica de fondos a todos los proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo por parte del Estado. Agrega una referencia al procedimiento de pago automatizado de facturas y establece que mediante instrucciones de aplicación general, la Dirección de Presupuestos podrá disponer la implementación progresiva y obligatoria del sistema de pago automatizado por parte de los órganos de la Administración del Estado.

El artículo 9 prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación de su personal, sin perjuicio de las excepciones que se señalan.

El artículo 10 establece un mecanismo de flexibilización de las dotaciones máximas de personal, de las horas semanales y de los cupos de honorarios, permitiendo reasignar dotación y cupos entre servicios y programas presupuestarios de cada servicio público, mediante decreto supremo expedido en conformidad al artículo 70 del decreto ley N°1.263, de 1975. Además, establece



mecanismo de reposición de los cupos vacantes que se produzcan en los servicios públicos como consecuencia de la cesación de funciones por las causas que se indican, en la proporción de un cupo por cada tres cupos vacantes. Sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto Ley N° 1.263, se agrega una prohibición para las jefaturas de los organismos y servicios públicos regidos por la presente ley, para nombrar o contratar personal, en cualquier calidad jurídica, excediendo las dotaciones o autorizaciones máximas de personal fijadas en esta ley o en sus glosas. La infracción de la referida prohibición, en ningún caso dará lugar a la creación de cargos o cupos adicionales ni conllevará la modificación de las dotaciones o de los presupuestos asignados a las instituciones.

El artículo 11 regula el reemplazo del personal contratado que, por cualquier causa, no pueda desempeñar sus funciones por un período superior a treinta días corridos, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, la cual no se requerirá para las licencias maternales, postnatal parental, ni licencias por enfermedad grave de un hijo menor de un año. Estos nuevos contratos no podrán tener una vigencia superior a seis meses. El objetivo de esta norma es evitar la falta de servicios causada por tales ausencias, todo ello resguardando la disponibilidad presupuestaria.

El artículo 12 regula las autorizaciones previas y sus excepciones requeridas para la inversión y gasto en proyectos nuevos, de continuidad o arrastre de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y para la adquisición de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga por parte de los órganos públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley N°1.263, de 1975; estableciendo los órganos que se exceptúan a dicha regla y



la vigencia de las instrucciones que impartidas por la Dirección de Presupuestos sobre la materia, tanto sean compatibles con lo dispuesto en este artículo y no sean modificadas, sustituidas o dejadas sin efecto

El artículo 13 regula el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe el Ministerio de Bienes Nacionales. En la presente ley se modifica la distribución y los porcentajes de los montos que se reciban durante el año 2027. Adicionalmente, se regula la imputación y el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas y se establecen las visaciones necesarias y los deberes de información relacionados con la enajenación de los inmuebles que forman parte de los patrimonios de afectación fiscal que se indican.

El artículo 14 establece los deberes de información de los distintos órganos del Estado regidos por la Ley de Presupuestos, los cuales se cumplirán conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley.

En el artículo 15 se fija el número máximo de personas que pueden modificar su calidad jurídica de honorario a suma alzada a contrata, fijando un procedimiento para que los servicios lo lleven a efecto. Asimismo, se faculta al Ministerio de Hacienda para que regule su aplicación mediante decreto supremo, incorporando un deber de información al H. Congreso Nacional. Finalmente, se autoriza a los servicios públicos a renovar las contrataciones de su personal a honorarios, sin quedar sujeto a las limitaciones establecidas en el artículo 11 del Estatuto Administrativo.

En el artículo 16 se establecen los deberes de información de cargo de



Dirección de Presupuestos, los cuales se proporcionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley.

En el artículo 17 se contempla un procedimiento de autorización destinado a analizar la procedencia y gasto producto de la afiliación, incorporación o mantención de los organismos públicos a diferentes organismos internacionales, radicándolo en el ministerio del ramo, con visación del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, sujeto a la verificación de la disponibilidad presupuestaria.

El artículo 18 identifica los procedimientos reglamentarios y administrativos necesarios para la ejecución del presupuesto, cuyas autorizaciones y visaciones respectivas son delegadas en la Dirección de Presupuestos.

El artículo 19 otorga la calidad de agentes públicos a los encargados de programas presupuestarios previstos en esta ley y que se encuentren contratados a honorarios.

El artículo 20 señala el porcentaje de los recursos destinados a aviso y publicaciones, que las reparticiones públicas deberán realizar en medios de comunicación con clara identificación local.

El artículo 21 fija el límite máximo para los gastos en publicidad que se podrán efectuar con cargo a cada partida, estableciendo, además, el mecanismo para distribuir dichos gastos en los programas presupuestarios de las respectivas partidas, y la posibilidad de modificar los máximos asignados a cada programa durante el año 2027, sin que ello signifique un incremento del límite máximo a nivel de partida. A continuación, establece que las actividades de publicidad y difusión que deban efectuar



los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley N°19.896. Para estos efectos, se define lo que se entenderá por gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos. Asimismo, establece que las publicaciones que se efectúen se hagan sólo por medios electrónicos.

El artículo 22 contempla un conjunto de exigencias cuyo objeto es lograr una mayor austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, en materia de comisiones de servicio y cantidad de integrantes de las comitivas de las y los ministros de Estado. Luego, se dispone que las visitas de Estado en que se convoque a autoridades superiores y a miembros del Congreso Nacional serán consideradas comisiones de servicio, no pudiendo significar ello duplicidad en el pago de viáticos.

El artículo 23 introduce normas destinadas a asegurar la adecuada asignación de recursos correspondientes a transferencias corrientes y de capital a instituciones privadas. Se establece el deber, salvo norma en contrario, de que la asignación sea a través de un proceso concursal, así como los casos excepcionales en que se permitirá la asignación directa de recursos. En dicho caso, se deberá remitir copia de la resolución fundada del jefe superior de la entidad al Consejo de Auditoría Interna de Gobierno o al organismo que lo reemplace. Del mismo modo, se estipula la necesidad de la suscripción de convenios en forma previa a la realización de estas transferencias, las que podrán realizarse en una o más cuotas según la finalidad del convenio. Esta última modificación tiene por objeto aclarar expresamente que las transferencias corrientes y de capital no necesariamente deben realizarse en cuotas.



El artículo 24 regula el contenido obligatorio de los convenios que deberán celebrarse para efectuar transferencias a instituciones privadas, a que hace referencia el artículo 23.

El artículo 25 establece los requisitos específicos que deben cumplir los convenios que se celebren con las instituciones privadas ejecutoras de políticas públicas. Se agrega que en los convenios se deberá incluir expresamente una cláusula que faculte al servicio para retener, de los pagos o sumas que correspondan al contratista, los montos que éste adeude por obligaciones laborales o previsionales generadas durante la ejecución del convenio, con el exclusivo objeto de destinarlos al pago de los trabajadores o entidades previsionales acreedoras.

El artículo 26 regula el proceso y plazos de reintegro de recursos provenientes de transferencias, que no hubieren sido utilizados ya sea tanto por los organismos públicos como por las instituciones privadas. Asimismo, se regulan las transferencias consolidables entre órganos públicos y aquellas destinadas a las municipalidades. Respecto de las transferencias consolidables, se precisan las formalidades que deben seguir los organismos públicos para realizarlas, reforzando así la claridad normativa y unificando las actuaciones administrativas a su respecto. De igual modo, se exige que todos los convenios de transferencias especifiquen el destino que tendrán los bienes muebles adquiridos con recursos públicos una vez terminada la ejecución del programa respectivo.

El artículo 27 establece las causales de inhabilidad de las autoridades, de los funcionarios públicos y del personal contratado sobre la base de honorarios, para



participar o intervenir en el proceso de concursabilidad, adjudicación o suscripción de un convenio.

El artículo 28 dispone reglas especiales para los procesos de asignación de recursos en forma conjunta, para los casos que indica, imputando el gasto a los ítems 01, 03 y 08, según corresponda. Dispone además que los órganos y servicios públicos regidos por esta ley que ejecuten programas públicos que formen parte de su oferta programática y que se financien con cargo a asignaciones correspondientes a distintos subtítulos, pertenecientes a uno o más programas presupuestarios, deberán remitir a la Dirección de Presupuestos la ejecución mensual de dichos programas, en las condiciones que establece.

El artículo 29 permite que los actos y contratos que se hayan ejecutado y celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y cuya imputación presupuestaria esté afecta a una asignación, ítem o subtítulo distinto de aquel que corresponde de acuerdo con el presente ordenamiento, continuarán produciendo sus efectos hasta su terminación con cargo a la imputación que corresponda de acuerdo con esta ley.

El artículo 30 establece que el arriendo de infraestructura para realizar actividades institucionales sólo será autorizado si el servicio respectivo no cuenta con infraestructura propia o ella no pueda ser facilitada por otro servicio público. Asimismo, se dispone que los servicios públicos deberán efectuar todas las gestiones para recuperar, desde las instituciones de salud previsional, los montos correspondientes a los subsidios por licencias médicas. Luego, se indica que los instructivos sobre buen uso de los recursos fiscales, que dicten el Presidente de la



República o el Ministerio de Hacienda serán obligatorios para los órganos de la Administración Central del Estado y los gobiernos regionales, agregando la posibilidad a los demás organismos y entidades de esta ley, para adherir a estas o dictar este tipo de instructivos.

El artículo 31 autoriza al Ministerio de Hacienda para impartir instrucciones de Presupuesto de Caja, endeudamiento, personal y proyectos de inversión a Empresas Públicas, con el propósito de promover la austeridad en la gestión y proteger el patrimonio de las mismas. Agrega que una vez presentado el informe de finanzas públicas correspondiente al cuarto trimestre de 2026, y previa revisión de la evolución de los ingresos y de las demás variables macroeconómicas relevantes, la Dirección de Presupuestos impartirá las instrucciones necesarias para resguardar el cumplimiento de la política fiscal establecida de conformidad con el artículo 1° de la ley N° 20.128.

El artículo 32 establece que los funcionarios públicos y las autoridades que se señalan no tendrán derecho a percibir dietas o remuneraciones que provengan de integrar órganos directivos de las entidades públicas que indica, y que incrementen sus remuneraciones.

El artículo 33 regula el procedimiento para modificar la dotación de vehículos entre los servicios dependientes de un mismo ministerio, sin alterar la dotación máxima total de la respectiva secretaría de Estado.

El artículo 34 establece la autorización para efectuar pagos imputables a la Deuda Flotante y a Otros Integros al Fisco, excediéndose de los montos previamente asignados, sancionando posteriormente tales excesos, de modo tal de



pagar tales obligaciones dentro de los plazos legales.

El artículo 35 establece que la información que los servicios públicos deban remitir al Congreso Nacional se proporcionará sólo a través de una plataforma electrónica administrada en conjunto por el Congreso y la Dirección de Presupuestos. La información que se contenga en esta plataforma será de acceso público, salvo aquella de carácter secreta o reservada conforme la normativa vigente y será notificada automáticamente por ésta a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Biblioteca del Congreso Nacional y a las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y del Senado cuyas materias de competencia se relacionen con la Partida respectiva, dándose por cumplido el deber del servicio de informar para todos los efectos legales. Dicha plataforma deberá encontrarse disponible para su uso a más tardar el 31 de julio de 2027. Además, establece el formato en que los servicios públicos deben proporcionar la información, así como los efectos del incumplimiento de cualquiera de los deberes de información contenidos en esta ley.

El artículo 36 autoriza al Fisco para postergar a contar de la fecha de publicación de esta ley y hasta su vigencia, el cumplimiento íntegro de la obligación contenida en el artículo tercero transitorio de la ley N°21.174, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, respecto del traspaso de saldos al Fondo de Contingencia Estratégico.

El artículo 37 dispone que, en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la ley N°19.863, el informe escrito a la Contraloría General de la República respecto de los gastos reservados asignados para el año 2027, debe suscribirse en conjunto con



la o el jefe de servicio y las o los jefes de las unidades operativas, además de contar con el visto bueno del o la ministra respectiva.

El artículo 38 fija el límite máximo a que pueden llegar las operaciones de cobertura de riesgo financieros que celebren las entidades autorizadas en el artículo 5 de la ley N°19.908.

El artículo 39 dispone un procedimiento de coordinación ante la ocurrencia de una emergencia, desastre o catástrofe declarada según las disposiciones de la ley N°16.282, en virtud de la cual se requieran recursos con el objeto de financiar las etapas de rehabilitación y de reconstrucción definidas en la ley N°21.364. En el caso de que se requieran recursos para financiar la etapa de reconstrucción, las solicitudes de los diferentes servicios públicos deberán ser coordinadas por el Ministro del Interior, quien presidirá el Comité de Reconstrucción.

El artículo 40 suspende transitoriamente el traspaso del servicio educacional a los Servicios Locales de Educación Pública que se indican, a los que les correspondería hacerlo el año 2027.

El artículo 41 regula la creación de una plataforma informática, administrada por el Ministerio de Hacienda, en la que se publicará la información detallada sobre los recursos asignados, su ejecución mensual a nivel transaccional para los organismos que conforman el Gobierno Central y los respectivos respaldos documentales.

El artículo 42, con la finalidad de permitir una eficiente administración de los recursos disponibles en las cuentas corrientes de los Servicios Públicos, establece, en concordancia con el artículo 6° del DL N°1.263 de 1975, que la totalidad de los recursos públicos que hayan sido



puestos a disposición de los órganos y servicios públicos, lo que incluye aquellos vengan de otras entidades públicas y hayan sido puestos a disposición mediante transferencias, consolidables o no, así como los correspondientes a sus ingresos propios, sean susceptibles de ser utilizados para el financiamiento de cualquiera de sus conceptos de gasto, para lo cual la Dirección de Presupuestos dictará instrucciones sobre la materia.

El artículo 43 dispone que los profesionales de la educación dependientes de sostenedores o administradores regidos por el párrafo tercero de las disposiciones transitorias de la ley N° 20.903 que Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que no hayan pasado a regirse por el Título III del Estatuto Docente a la fecha de publicación de esta ley, lo harán en forma obligatoria a contar de julio de 2027, sin perjuicio del derecho que les asiste de conformidad a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto transitorio de la precitada ley, con la excepción que indica.

El artículo 44 establece que los sostenedores que hayan percibido la subvención escolar preferencial (SEP) regulada por la ley N° 20.248 y que, conforme a lo registrado por la Superintendencia de Educación, cuenten con saldos acreditados o no acreditados derivados de Convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que hayan expirado entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de entrada en vigencia de esta ley, deberán presentar al Ministerio de Educación un plan de ejecución y recuperación de saldos, a más tardar el 30 de abril de 2027. Mediante resolución del Ministerio de Educación, visada por la Dirección de Presupuestos, se determinarán el contenido mínimo del plan, las acciones que podrán comprometerse y el plazo para su ejecución, así como el plazo y la forma simplificada de rendición de cuentas.



Además, establece las consecuencias derivadas del incumplimiento del Plan.

El artículo 45 dispone que los ministerios y servicios públicos no podrán realizar celebraciones generales ni de aniversarios que impliquen desembolsar gasto fiscal, con las dos excepciones que indica.

El artículo 46 dispone que, a más tardar el 15 de enero de 2027, los jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de los servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, deberán informar a la Dirección de Presupuestos sobre los procedimientos disciplinarios instruidos por uso indebido de licencias médicas, desde el mes de mayo del año 2025 en adelante. Dicho informe deberá contener la información que indica actualizada al 31 de diciembre de 2026. Luego, la Dirección de Presupuestos debe enviar, de acuerdo con lo indicado en el artículo 35 de esta ley, un informe consolidado sobre el estado de dichos procesos disciplinarios, a más tardar el 30 de enero de 2027.

En el artículo 47 se establece que la obligación de informar recaerá en la autoridad, jefe o superior del servicio señalado conforme al artículo 16 de la ley N° 20.285. En caso de incumplimiento, se les aplicarán las sanciones previstas en el artículo 45 de dicha ley.

En los artículos 48, 49 y 50 se establece que, con el objetivo de destrabar la inversión, los estudios básicos, programas y proyectos de inversión en ejecución mantendrán la identificación presupuestaria efectuada y la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Asimismo, aquellas iniciativas de inversión que consideren exclusivamente la



conservación de infraestructura pública sólo requerirán ingresar al Sistema Nacional de Inversiones. Además, todo proyecto de infraestructura menor emplazado en zonas rurales o en localidades concentradas o semidispersas con una población inferior a 5.000 habitantes, y cuyo monto total de inversión sea inferior a 30.000 UTM, podrá evaluarse mediante un procedimiento simplificado e ingresarse al Banco Integrado de Proyectos. Enseguida, se dispone que las obras públicas adjudicadas por trato directo o licitación privada cuyo monto total no exceda de 30.000 UTM, o por licitación pública cuyo monto total no exceda de 75.000 UTM, podrán iniciarse materialmente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y en la normativa aplicable, desde la notificación del acto administrativo adjudicatorio. En estos casos, serán remitidos a la Contraloría General de la República para su registro, sin perjuicio del control de reemplazo que pueda desarrollar para estos efectos.

Finalmente, el artículo 51 fija la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, con la excepción que señala, y permite que ésta sea publicada en su totalidad junto con las instrucciones para su ejecución.

PROYECTO DE LEY:

ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, para el año 2027, según el detalle que se indica:



Artículo 1° Proyecto de Ley de Presupuestos Período 2027
En Moneda Nacional
En Miles de \$

	Resumen de los Presupuestos de las Partidas	Deducciones de Transferencias	Total
INGRESOS	110.109.202.052	4.296.649.457	105.812.552.595
IMPUESTOS	69.091.886.931	0	69.091.886.931
IMPOSICIONES PREVISIONALES	4.978.196.251	0	4.978.196.251
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.529.773.583	2.490.683.063	39.090.520
RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.081.644.447	0	2.081.644.447
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.481.400.774	0	1.481.400.774
OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.155.540.877	0	3.155.540.877
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.715.582	0	10.715.582
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	905.844.318	0	905.844.318
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.285.580.618	0	2.285.580.618
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.894.277.934	1.805.966.394	88.311.540
ENDEUDAMIENTO	21.681.056.345	0	21.681.056.345
SALDO INICIAL DE CAJA	13.284.392	0	13.284.392
GASTOS	110.109.202.052	4.296.649.457	105.812.552.595
GASTOS EN PERSONAL	19.036.605.400	0	19.036.605.400
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.065.877.308	0	7.065.877.308
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16.539.256.105	0	16.539.256.105
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.171.335.873	935.168.867	29.236.167.006
INTEGROS AL FISCO	1.588.271.183	1.555.514.196	32.756.987
OTROS GASTOS CORRIENTES	33.190.808	0	33.190.808
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	473.584.580	0	473.584.580
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.610.962.193	0	1.610.962.193
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.904.376.779	0	4.904.376.779
PRÉSTAMOS	2.381.668.221	0	2.381.668.221
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.731.823.358	1.805.966.394	7.925.856.964
SERVICIO DE LA DEUDA	16.559.244.234	0	16.559.244.234
SALDO FINAL DE CAJA	13.006.010	0	13.006.010



Artículo 1º Proyecto de Ley de Presupuestos Período 2027
 En Moneda Extranjera Convertida a Dólares
 En Miles de US \$

	Resumen de los Presupuestos de las Partidas	Deducciones de Transferencias	Total
INGRESOS	6.297.179	5	6.297.174
IMPUESTOS	867.000	0	867.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5	5	0
RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.311.089	0	2.311.089
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.584	0	2.584
OTROS INGRESOS CORRIENTES	16.049	0	16.049
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	0	10
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.022.716	0	3.022.716
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.341	0	2.341
ENDEUDAMIENTO	73.368	0	73.368
SALDO INICIAL DE CAJA	2.017	0	2.017
GASTOS	6.297.179	5	6.297.174
GASTOS EN PERSONAL	138.116	0	138.116
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	211.815	0	211.815
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	313	0	313
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663.554	0	663.554
INTEGROS AL FISCO	5	5	0
OTROS GASTOS CORRIENTES	110	0	110
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.390	0	3.390
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	453.033	0	453.033
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	467	0	467
PRÉSTAMOS	2.341	0	2.341
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3	0	3
SERVICIO DE LA DEUDA	4.821.965	0	4.821.965
SALDO FINAL DE CAJA	2.067	0	2.067

ARTÍCULO 2.- Durante el año **2027** el Presidente de la República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan las empresas del Sector Público y las universidades estatales, hasta por la cantidad de US\$500.000.000 o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, y se indicarán las fuentes de los recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Estos decretos podrán incluir los requisitos de información y otras actuaciones que deberán cumplir las empresas y universidades señaladas mientras se encuentren vigentes los créditos o bonos.

Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de monedas y demás gastos que



irroguen, cualquiera sea su denominación presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones.

Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la garantía estatal indicada deberán suscribir previamente, cuando corresponda, un convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, en que se especificará los objetivos y los resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable el inciso segundo del artículo 2 de la ley N° 19.847.

Autorízase a las universidades estatales para contratar durante el año **2027** empréstitos para el financiamiento de capital de trabajo y de remuneraciones -con excepción de incrementos remuneracionales-, refinanciamiento de pasivos, y/o proyectos de inversión, por períodos de hasta veinte años, de forma que, con los montos que se contraten, el nivel del stock del endeudamiento financiero no deberá exceder del cien por ciento del patrimonio respectivo. El servicio de la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las mismas universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos, deberán contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda.

La respuesta por parte del Ministerio de Hacienda deberá efectuarse dentro del plazo de sesenta días corridos, a contar de la recepción conforme de los respectivos antecedentes. Para la contratación de empréstitos cuyo vencimiento no exceda la duración del actual período presidencial, la visación del Ministerio de Hacienda deberá efectuarse dentro del plazo de veinte días corridos. El análisis de la relación deuda-patrimonio se realizará habida consideración de los estados financieros trimestrales de la respectiva universidad estatal correspondientes al trimestre anterior al de la solicitud.

La contratación de los empréstitos que se autoricen a las universidades estatales no estará sujeta a las disposiciones de la ley N° 19.886 ni de su reglamento. No obstante, al solicitar la autorización respectiva, las universidades deberán acompañar, a lo menos, tres cotizaciones de entidades financieras.

Copia electrónica de los contratos de los antedichos empréstitos, con indicación del monto y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de un informe que especifique los objetivos y los resultados esperados de cada operación de endeudamiento, serán enviados al Ministerio de Educación, a la



Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Dirección de Presupuestos, dentro de los diez días siguientes al de su contratación.

ARTÍCULO 3.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US\$25.000.000 miles por concepto de endeudamiento, el que incluye amortizaciones e intereses de la deuda fiscal y que se incorpora en los Ingresos Generales de la Nación.

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US\$600.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo, se podrán emitir y colocar bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República. La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario **2027** y aquellas que se contraigan para efectuar el pago anticipado total o parcial de deudas constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para el año **2027**, no serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones que se contraigan, con indicación de las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copias de estos decretos serán enviadas a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.

ARTÍCULO 4.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes y otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1, en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítems de los



referidos Subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del referido decreto ley, a las glosas de esta ley señaladas expresamente como excedibles ni a los incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley antes señalado. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades aprobadas en el artículo 1, de los Subtítulos de adquisición de activos no financieros, de las iniciativas de inversión y transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10 por ciento de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en el 10 por ciento.

Sin perjuicio de las disposiciones de este artículo, el uso de los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, creado por el artículo 10 de la ley N° 20.128, que se efectúe de acuerdo con lo establecido en el inciso final de dicha norma, requerirá autorización legal cuando su monto acumulado anual supere el 0,3% del Producto Interno Bruto.

ARTÍCULO 5.- Suspéndese durante el año **2027** la aplicación de la letra d) del artículo 87 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata. Asimismo, durante el año **2027** no podrá contratarse personal suplente asimilado a los cargos de



planta que no se encuentren desempeñados por su titular por aplicación del mecanismo anterior.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable respecto de las personas que estén haciendo uso de dichas excepciones al momento de publicarse esta ley.

ARTÍCULO 6.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a realizar en el año **2027**, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de 1.000 unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de inversión, y de 500 unidades tributarias mensuales en el caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Si se trata de los montos incluidos en las Partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de 10.000 unidades tributarias mensuales para los proyectos y programas de inversión y de 3.000 unidades tributarias mensuales en el caso de los estudios básicos.

Cuando el monto respectivo sea inferior a los señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda, o en el que lo reemplace.

Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que incumplan las leyes laborales y previsionales, lo que deberá ser determinado por la autoridad competente durante el desarrollo de tales contratos, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan y del ejercicio, por la institución mandante que tenga la calidad de empresa principal conforme al Código del Trabajo, de los derechos de información, retención y pago por subrogación previstos en el artículo 183-C de dicho Código, respecto de obligaciones de dar exigibles, sean laborales o previsionales, correspondientes al período de prestación de servicios en régimen de subcontratación, con cargo a los haberes pendientes de pago a la respectiva empresa contratista y/o subcontratista. Esta calificación pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.



Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento de que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los referidos certificados en la oportunidad correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.

ARTÍCULO 7.- En los decretos que contengan transferencias, que hayan sido dispuestas en esta ley o se creen en virtud del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, con imputación al Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, y al Subtítulo 33, Transferencias de Capital, de este presupuesto, para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que la institución receptora deberá dar a los recursos, las condiciones o modalidades de su reintegro y la información que respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que se determine.

Aquellas transferencias incluidas en el Subtítulo 24, que constituyan transferencias corrientes a Unidades o Programas del Servicio, ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con visación de la Dirección de Presupuestos. Deberá remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de actividades, junto con la información de ejecución presupuestaria. Dicho desglose constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación de esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto. Asimismo, el personal que sea contratado con cargo a dichos recursos no formará parte de la dotación del Servicio.

ARTÍCULO 8.- Todos los pagos a proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo que se realicen por parte de los órganos de la Administración del Estado durante el año **2027**, incluidos aquellos relacionados a contratos de obra o infraestructura, deberán realizarse mediante transferencia electrónica, y, de ser procedente, mediante el procedimiento de pago automatizado de facturas, a que hace referencia el artículo 104 de la ley N° 21.806. Además, su reconocimiento en la ejecución presupuestaria deberá realizarse con pleno



cumplimiento de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. Para ello, los órganos de la Administración del Estado, como parte del proceso de contratación, deberán requerir la información necesaria para realizar estas transferencias a los proveedores que correspondan y cumplir las instrucciones técnicas generales que al respecto emita la Dirección de Presupuestos.

Mediante instrucciones de aplicación general, la Dirección de Presupuestos podrá disponer la implementación progresiva y obligatoria del sistema de pago automatizado por parte de los órganos de la Administración del Estado, estableciendo los plazos y órganos comprendidos.

ARTÍCULO 9.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, de Gendarmería de Chile y en los de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

ARTÍCULO 10.- No obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, podrá aumentarse la dotación u horas semanales de alguno de ellos con cargo a la disminución de otro, o con cargo a la misma cantidad de cupos de honorarios, por decreto dictado en la forma dispuesta en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.

Asimismo, podrán aumentarse los cupos de honorarios fijados en este presupuesto a los servicios públicos y programas presupuestarios, con cargo a la disminución de otro, o con cargo a la misma cantidad de cupos de contrata. De igual forma, durante el año 2027 los cupos de honorarios y los cupos de honorarios que asesoren a autoridades serán intercambiables mediante el mecanismo señalado en este inciso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, durante el primer trimestre del año **2027**, a solicitud de los respectivos servicios e instituciones del sector público, el Ministro de Hacienda podrá modificar el límite máximo de personas contratadas a honorarios, fijado en las respectivas glosas



asociadas a los Subtítulos 21 y 24. Dentro de los treinta días corridos siguientes al término del trimestre referido, el Ministerio de Hacienda deberá remitir un informe a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en que detalle el ejercicio de la facultad de manera agregada, así como desagregada, indicando si corresponden a asesores de autoridades, y también clasificando por Partida, Capítulo y Programa, en este último caso con indicación de los ítems o asignaciones donde dicha facultad fue ejercida.

Durante el año **2027** sólo podrá reponerse un cupo por cada tres cupos vacantes que se produzcan en los servicios públicos que tengan fijada dotación máxima de personal en esta ley, por haberse acogido a un beneficio de retiro previsto en la ley o por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional que realicen sus funcionarios.

Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan en la proporción establecida en el inciso precedente, la institución respectiva deberá contar con disponibilidad presupuestaria suficiente para financiar las reposiciones, lo que será certificado por la autoridad del Servicio, sobre la base del informe de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo.

El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que se fundamenta.

Prohíbese a las jefaturas de los organismos y servicios públicos regidos por la presente ley, nombrar o contratar personal, en cualquier calidad jurídica, excediendo las dotaciones o autorizaciones máximas de personal fijadas en esta ley o en sus glosas. La infracción de la referida prohibición, en ningún caso dará lugar a la creación de cargos o cupos adicionales ni conllevarán la modificación de las dotaciones o de los presupuestos asignados a las instituciones.

ARTÍCULO 11.- Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal que reemplace a los funcionarios que por cualquier razón se encuentren imposibilitados para desempeñar sus labores por un período superior a treinta días corridos. Los contratos para efectuar labores de reemplazo no podrán tener una vigencia superior a seis meses, no se imputarán a la respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse previa autorización de la Dirección de Presupuestos, la que verificará la disponibilidad presupuestaria que corresponda. No



requerirá dicha autorización en los casos de licencias maternales, postnatal parental y/o licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año, lo que deberá, sin embargo, ser informado a la Dirección de Presupuestos.

En aquellos casos en que se esté reemplazando a un funcionario público que ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, el jefe superior del servicio deberá considerar el ejercicio de la declaración de la salud incompatible con el desempeño del cargo del funcionario reemplazado de conformidad con el artículo 151 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 12.- Los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, con exclusión del Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, necesitarán autorización previa de la Dirección de Presupuestos para efectuar inversiones y gastos en proyectos nuevos, de continuidad o arrastre en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), cuando éstas no hayan sido aprobadas durante el proceso EVALTIC correspondiente, o por el Ministerio de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en la letra h) del artículo 6, del artículo primero, de la ley N° 21.730, habida consideración de las directrices técnicas proporcionadas por EVALTIC, o aquellas que no formen parte de un proceso de compras coordinadas comunicado por la Dirección de Compras y Contratación Pública y autorizado por la Dirección de Presupuestos.

Los órganos y servicios públicos de la Administración del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa de la Dirección de Presupuestos para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere el que fije dicha Dirección.

Se exceptúa de las disposiciones anteriores a la Agencia Nacional de Inteligencia, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sólo respecto de compras de material bélico, de vehículos de color institucional a que se refiere el Reglamento de Vehículos para Carabineros de Chile N° 20 y su directiva, de los vehículos operativos de la Policía de Investigaciones, los vehículos blindados destinados al traslado seguro de población penal de alto riesgo, vehículos



destinados al traslado seguro de población penal general, y de aquellas asociadas a labores de inteligencia.

La Dirección de Presupuestos establecerá los parámetros técnicos, montos máximos, e impartirá instrucciones específicas respecto de las autorizaciones indicadas en los incisos anteriores y las requeridas para celebrar los contratos señalados en el artículo 14 de la ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal, y podrá establecer los mecanismos de adquisición de los productos o contratación de los servicios, y cualquier otra modalidad o procedimiento que ella determine.

Las instrucciones impartidas por la Dirección de Presupuestos respecto de estas materias se mantendrán vigentes y serán aplicables durante el ejercicio presupuestario 2027, en tanto sean compatibles con lo dispuesto en este artículo y mientras no sean modificadas, sustituidas o dejadas sin efecto por dicha Dirección.

ARTÍCULO 13.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año **2027** el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas en años anteriores, se distribuirá de acuerdo con lo siguiente:

- a) 35% pagadero al gobierno regional de la región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión, según la glosa 01 común de la Partida 31 "Financiamiento Gobiernos Regionales".
- b) 65% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas o aportes de bienes que efectúe dicho ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente o al cumplimiento de su giro.

No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenan todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos o aportados por el Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional respectivo el treinta y cinco por ciento del precio pagado al



referido ministerio, o la proporción correspondiente si la venta es parcial.

En el caso de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas, las aplicaciones que se efectúen con cargo a los recursos provenientes de las enajenaciones se incorporarán anualmente en la Ley de Presupuestos, en los respectivos Capítulos de la Partida del Ministerio de Defensa Nacional, y se identificarán los ingresos y gastos estimados en cada caso. Los recursos sólo podrán emplearse en proyectos de infraestructura, incluidos proyectos de inversión, tales como habitabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida de todo el personal integrante de estas instituciones, y en proyectos de infraestructura militar.

Durante el año **2027** la enajenación de los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de afectación fiscal del Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército o de los Servicios de Bienestar de las Fuerzas Armadas requerirá de la visación del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Bienes Nacionales.

Asimismo, la enajenación de los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de afectación fiscal del Servicio de Bienestar de Carabineros de Chile o de la Jefatura de Bienestar de la Policía de Investigaciones de Chile requerirá la visación previa del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Bienes Nacionales.

Las enajenaciones a que se refieren los incisos anteriores deberán ser informadas previamente por el Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Seguridad Pública, según corresponda, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

ARTÍCULO 14.- Los órganos y servicios del Estado regidos por esta ley, o los que se especifiquen en los numerales siguientes, informarán conforme a lo dispuesto en el artículo 35, lo siguiente:

1. Un cronograma mensual, desagregado por programa presupuestario y por Subtítulos, de gastos del año en curso, que deberá ser enviado durante el mes de marzo, y actualizado en el mes de julio, junto a una explicación de los principales cambios ocurridos en el transcurso del primer semestre y consignados en dicha actualización.



2. Copia de los informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final.
3. La nómina de los proyectos o programas desarrollados interna y/o externamente que permitan, en lo específico, su posterior uso como tecnologías duales, con identificación de proyectos nuevos o de arrastre, breve descripción de su objetivo, presupuesto anual, organismos involucrados, y su fecha de inicio y de término, lo que será informado antes del 31 de marzo, mediante documento electrónico que permita el tratamiento de sus datos.

En el mismo formato y con igual desagregación, se enviará trimestralmente el presupuesto vigente, treinta días después de terminado el trimestre respectivo, estado de avance físico y financiero de los proyectos o programas, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado.

4. Cada gobierno regional deberá informar los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que realizará en la región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos decretos.
5. El monto ejecutado por concepto de publicidad y difusión, imputados al Subtítulo 22, ítem 07, en que haya incurrido, por programa presupuestario, en el formato que definirá para tal efecto el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Asimismo, informará el detalle del gasto por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, y para ello distinguirá entre avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, medios digitales, cines, teatros, revistas, contratos con agencias publicitarias y/o servicios de exposiciones e indicará los proveedores de cada uno de ellos, si éstos tienen una clara identificación local y si pertenecen a un holding, conglomerado o cadena de comunicación. Respecto de estos últimos, se adjuntará además la nómina de las entidades ejecutoras de dichas actividades, su mecanismo de contratación y el monto adjudicado, desagregado por programa. Esta información se



remitirá trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.

6. Sobre las comisiones de servicio en el país y en el extranjero. Se deberá detallar el número de comisiones y cometidos funcionarios, funcionarios designados, su destino, viático recibido y sus fundamentos y el detalle de los pasajes utilizados en dichas comisiones de servicios, y se indicará el titular de éstos, destino, valor y fecha, a excepción de aquellas que tengan el carácter de reservadas, las que deberán informarse en sesión secreta. Esta información se remitirá trimestralmente.

7. Las contrataciones y desvinculaciones realizadas durante cada trimestre. En ambos casos, se deberá consignar el nombre, cargo y título de educación superior si lo hubiera.

En el caso de las desvinculaciones, deberá consignarse la cantidad de funcionarios que cesen en sus funciones en cada uno de los servicios públicos con los que se relacionen, la antigüedad en el cargo, la fecha y la causal de cesación.

8. Los recursos que son implementados directamente por la institución, aquellos que son ejecutados por medio de convenio marco, licitación pública, licitación privada o trato directo, en cada uno de los programas que constituyen la respectiva Partida. Esta información se remitirá trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre e incluirá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

9. Los gastos asociados a remuneraciones de trabajadores, con indicación de la calidad jurídica de los contratos y los porcentajes de tipos de contratación en relación con el total del personal, diferenciado según género y por estamento, la duración media y promedio de cada contrato, y el número de veces que ha sido contratado bajo esta modalidad por la entidad pública referida. Esta información se remitirá semestralmente e incluirá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

10. Los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para las actividades propias del ministerio. Se informará trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, e incluirá a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, y a la Comisión de Vivienda



Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados.

11. Los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Educación, y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2027, la nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2027. Asimismo, a partir de febrero de 2027, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga, respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2027.
12. Trimestralmente se informará sobre las instituciones de las señaladas en el artículo 2 y el monto, la duración y las condiciones en que han tomado deuda con garantía estatal.
13. Un reporte trimestral desagregado por ministerio y por región, que dé cuenta de los proyectos o programas identificados de conformidad al artículo 7 de esta ley, consignando, a nivel de subtítulo, el etiquetado de "Cambio Climático", así como las sucesivas evaluaciones a que hayan sido sometido dichos proyectos y programas.
14. Las reasignaciones que impliquen, en definitiva, una disminución del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, al Ministerio Público o al Poder Judicial, deberán informarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, a las Comisiones de Defensa Nacional de ambas ramas del Congreso Nacional, a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente al acto administrativo que las ordene.

Asimismo, los órganos y servicios del Estado regidos por esta ley deberán cumplir con las siguientes obligaciones de información y publicación:



- a) Publicar en su sitio electrónico institucional un informe trimestral que contenga, en su caso, la individualización de los proyectos beneficiados con cargo a los Subtítulos 24 y 33, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados, la modalidad de asignación, las actividades financiadas, los objetivos y metas anuales, los montos y porcentajes de ejecución, desagregados por programa presupuestario, región y comuna según sea el caso, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. En caso de contener coberturas y recursos asignados en glosa, la información deberá presentarse con dicho nivel de desagregación.

Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos.

La precitada información deberá ser remitida en igual plazo y con el mismo detalle a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

- b) Cada ministerio y los demás órganos de la Administración del Estado deberán publicar en sus respectivos sitios electrónicos institucionales la información relativa al presupuesto asignado por esta ley.

Para estos efectos procurarán utilizar un lenguaje claro que permita ser comprendido por la mayor cantidad de personas, con utilización de gráficos y otros mecanismos que permitan comprender, de manera sencilla, la composición del presupuesto y de los distintos elementos que lo integran, y vincularán esta información a las orientaciones estratégicas, objetivos prioritarios y resultados esperados para el período.

Se deberán contemplar mecanismos de participación ciudadana, que permitan recoger inquietudes y realizar consultas sobre iniciativas en estudio o para la priorización de acciones futuras, a través de consejos de la sociedad civil, de carácter consultivo, conformados acorde con lo establecido en el artículo 74 del decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.



Los órganos y servicios públicos obligados a remitir la información señalada en el presente artículo deberán ponerla a disposición en los sitios electrónicos en los que dan cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa. La omisión de la publicación en la forma señalada o su falta de actualización podrá reclamarse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

ARTÍCULO 15.- Fíjase para el año 2027 en 1.500 el número máximo de personas que podrá modificar su calidad jurídica de honorario a suma alzada a contrata, y se asimilará al grado del estamento que le corresponda según el sistema de remuneraciones del servicio, cuya remuneración líquida mensualizada le permita mantener su honorario líquido mensual.

Para efectuar los traspasos señalados, a solicitud de los respectivos servicios e instituciones del Sector Público, podrá ser modificado el límite máximo de la dotación de personal fijada en las respectivas glosas presupuestarias de la presente ley, con cargo a una compensación equivalente en el número de personas contratadas a honorarios a suma alzada, fijado en las glosas presupuestarias correspondientes, asociadas a los Subtítulos 21 y 24.

Los ajustes derivados de la aplicación de este artículo serán establecidos por medio de decretos del Ministerio de Hacienda, dictados conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y deberán ser informados mensualmente, dentro de los treinta días siguientes al término del mes respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. También, mediante decretos del Ministerio de Hacienda dictados conforme a lo señalado anteriormente, se establecerán los requisitos para el traspaso; la forma de determinar la remuneración líquida mensualizada, para cuyo cálculo no procederá descontar los impuestos, el honorario líquido mensual y el grado de asimilación al estamento que le corresponda según el sistema de remuneraciones del servicio; los criterios de priorización que, a lo menos, deberán establecer las jefas y los jefes superiores de servicio para el caso que haya más personal a honorarios que cupos disponibles para el traspaso; y las demás normas de procedimiento que sean necesarias para la implementación de este artículo.



Para efectos de establecer los criterios de priorización la jefatura superior del servicio deberá dictar una resolución que los determinará considerando, en todo caso, aquellos criterios que señalen los decretos que indica el inciso precedente. Previo a su dictación, el servicio implementará un mecanismo de carácter informativo con las asociaciones de funcionarios constituidas conforme a la ley N° 19.296 existentes en la respectiva institución.

Durante el año 2027, los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley podrán renovar las contrataciones de su personal sobre la base de honorarios sin quedar sujeto a las limitaciones establecidas en el artículo 11 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, u otra norma de similar naturaleza que rija al respectivo órgano público. Asimismo, los reemplazos del personal a honorarios no quedarán afectos a la limitación antes señalada.

ARTÍCULO 16.- La Dirección de Presupuestos proporcionará conforme lo dispuesto en el artículo 35 los informes y documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:

1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo mes. Este informe deberá incluir la ejecución mensual de gastos correspondientes a los subtítulos 30 "Adquisición de Activos Financieros" y 32 "Préstamos", del clasificador de gastos.
2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, e incluirá en anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno Central. Del mismo modo, deberá incluir en anexos información del gasto devengado en el Gobierno Central del Subtítulo 22, ítem 07, Publicidad y Difusión, desagregado por asignación, y detallará el gasto por Partida y su variación real respecto de igual trimestre del año anterior y de las asignaciones comprendidas en los Subtítulos 24 y 33, para cada uno de los programas de esta ley.
3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y gastos de las Partidas de esta ley, al nivel de



Partidas, Capítulos y Programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.

4. Copia de los decretos de modificaciones presupuestarias totalmente tramitados durante cada mes y un informe consolidado de las modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho mes por Partida, que contenga una descripción que indique si se trata de incrementos por aplicación de leyes, reducciones por ajuste fiscal, o modificaciones por decisiones de política, con especificación de los montos incrementados o disminuidos por Subtítulo y Partida, dentro de los treinta días siguientes a su término.
5. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central con sus notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta y noventa días siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente.
6. Informe semestral consolidado y detallado sobre la deuda pública y demás obligaciones de pago del Estado, correspondiente al semestre inmediatamente anterior. El informe deberá presentar, para cada Partida, Capítulo y, cuando corresponda, Programa, a lo menos, el siguiente desglose informativo:
 - a. Deuda directa del Estado: saldo total, al cierre del semestre informado, de las obligaciones devengadas y pendientes de pago del Fisco y de los órganos y servicios públicos comprendidos en esta ley, incluidos los compromisos contabilizados y demás obligaciones exigibles con cargo a gastos presupuestarios.
 - b. Desglose por antigüedad de la deuda: monto total de las obligaciones pendientes de pago, clasificadas según el tiempo transcurrido desde su devengamiento o, cuando corresponda, recepción de la factura, en los siguientes tramos: de 0 a 30 días; de 31 a 90 días; y más de 90 días.

El informe deberá presentarse en forma consolidada y desagregada por Partida y Capítulo, y tendrá por objeto



facilitar la fiscalización parlamentaria de la gestión financiera y servir de insumo para la formulación de la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año siguiente.

7. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro Público, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
8. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los noventa días siguientes al término del respectivo trimestre.
9. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5 de la ley N° 19.908, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
10. Copia del informe trimestral señalado en el artículo 1 quinquies de la ley N° 20.128 con la actualización del escenario fiscal que considere una proyección de ingresos y gastos, junto a la correspondiente proyección del balance efectivo y cíclicamente ajustado, la proyección de deuda y la posición financiera neta para el año **2027** y para el programa financiero en cada caso, adicional al Informe sobre Finanzas Públicas establecido en el número 22 del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 106, de 1960, del Ministerio de Hacienda.

En la misma oportunidad se informará acerca de la necesidad de financiamiento que deba ser atendida con cargo a la autorización de endeudamiento otorgada de conformidad al artículo 3. La entrega de esa información respetará los deberes de reserva de información establecidos en leyes especiales.

En estos informes se actualizará la proyección de ingresos efectivos y estructurales del Gobierno Central, habida consideración de la recaudación efectiva del año **2026**, los ajustes metodológicos que se implementen y la actualización de proyecciones macroeconómicas para el año. Sobre esta base la Dirección de Presupuestos determinará el nivel de gastos compatible con el cumplimiento de la meta fiscal del año y los ajustes que se requieran para su logro.



11. Antecedentes relativos a la planificación estratégica de los órganos de la Administración del Estado o, excluidos el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Servicio Electoral y las Fuerzas Armadas. Dichos antecedentes deberán contemplar, a lo menos:

- a) Definiciones estratégicas, incluida la misión institucional, identificación de sus prioridades a través de objetivos estratégicos y bienes y servicios provistos a sus usuarios.
- b) Indicadores de desempeño vinculados a los objetivos estratégicos institucionales.
- c) Medición efectiva de los indicadores de desempeño del año anterior

Para lo anterior, la Dirección de Presupuestos podrá enviar instrucciones específicas.

La información correspondiente a la medición de los indicadores de desempeño del año anterior se remitirá durante el mes de mayo y la información correspondiente a la planificación estratégica del periodo **2027-2030** se remitirá en el mes de septiembre

12. Antecedentes relativos al diseño y desempeño de la oferta programática vigente de los órganos de la Administración del Estado. Se entenderá por tales a los ministerios y sus respectivos órganos desconcentrados, y servicios públicos. Dichos antecedentes deberán contemplar:

- a) La información que la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social recaben en virtud del monitoreo del desempeño de los programas públicos correspondientes a la oferta programática ejecutada el año anterior. Esta información deberá remitirse en el mes de mayo.
- b) La información que la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social recaben en virtud de la evaluación ex ante de diseño de los programas nuevos o aquellos que reformulen su diseño en forma significativa presentados en el marco del proceso de formulación presupuestaria del año siguiente. Dicha información deberá remitirse cuarenta y cinco días antes



de que comience la discusión presupuestaria del año siguiente.

- c) La información recabada de la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y en el reglamento fijado a través del decreto N° 2.068, de 2022, del Ministerio de Hacienda. Esta información deberá remitirse quince días antes de que comience la discusión presupuestaria del año siguiente.
13. Durante el primer trimestre del año la Dirección de Presupuestos informará, de forma agregada, y a nivel de Partida, Capítulo y Programa, los gastos en personal que son imputados al Subtítulo 24, y señalará el monto que la Ley de Presupuestos autoriza al respecto y, a la fecha, la ejecución de dichos recursos y el número de personas que se desempeñan en dichos cargos, según corresponda.
- De la misma forma, y como parte integrante de los antecedentes que acompañan los contenidos del proyecto de ley de presupuestos del año siguiente, se informará de forma agregada, y a nivel de Partida, Capítulo y Programa, los gastos en personal que se propone serán imputados al Subtítulo 24, junto con una estimación del número de personas que se espera se desempeñen en dichos cargos. Se actualizará la información señalada precedentemente, de forma que permita su comparación respecto de los recursos autorizados por la ley, su ejecución a la fecha y el número de personas que se desempeñan en dichos cargos, según corresponda.
- La Dirección de Presupuestos, remitirá trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el Informe sobre finanzas públicas al que se refiere el número 22 del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 106, de 1960, del Ministerio de Hacienda y el artículo 1 quinquies de la ley N° 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal.
14. Mensualmente deberá informar la nómina de proyectos de inversión presupuestados en el Subtítulo 31 por Partida, y para ello desagregará la información por etapa de diseño, ejecución y fecha de entrega prevista.
15. Un informe financiero trimestral sobre las Empresas del Estado, incluidas Televisión Nacional de Chile, CODELCO



y Banco del Estado de Chile, y sobre aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan una participación de capital igual o superior al cincuenta por ciento o mayoría en el directorio, con excepción de las señaladas en el artículo 11 de la ley N° 18.382.

El informe deberá contener, respecto de cada empresa: i) el total de su deuda, indicando la proporción garantizada por el Estado, así como las fechas y condiciones de vencimiento de las respectivas obligaciones; ii) el balance consolidado y estado de resultados, tanto a nivel individual como consolidado, cuando corresponda; y iii) las enajenaciones de activos realizadas durante el periodo informado que se encuentren fuera del giro ordinario de sus negocios.

Las empresas comprendidas en el párrafo primero deberán proporcionar a la Dirección de Presupuestos, la información necesaria para la elaboración del informe, de acuerdo a las instrucciones que al efecto esta Dirección emita.

Dicho informe será remitido a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la Comisión para el Mercado Financiero.

La información señalada en este artículo deberá publicarse en el sitio electrónico de la Dirección de Presupuestos

Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales 1 al 11 anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto por la Dirección de Presupuestos. Además, dicha información deberá ser publicada en los mismos plazos en los respectivos sitios electrónicos de los organismos obligados a proporcionarla.

ARTÍCULO 17.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del ministerio del ramo, visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o asociarse a organismos internacionales o para mantener dicha calidad, renovar las afiliaciones existentes o convenir aumento de sus cuotas. En el evento de que la incorporación o renovación les demande efectuar contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los convenios



consisten en aumentos del monto de cuotas, su visación quedará condicionada a la disponibilidad presupuestaria, que será verificada por la Dirección de Presupuestos.

ARTÍCULO 18.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.

Las aprobaciones, visaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúe por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979; la oración final del inciso segundo del artículo 8 del decreto ley N° 1.056, de 1975; el artículo 4 de la ley N° 19.896; el artículo 19 de la ley N° 18.382; la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9 de la ley N° 19.104; las autorizaciones contempladas en el artículo 14 de la ley N° 20.128, en el artículo 27 del decreto ley N° 1.263 de 1975, y aquella dispuesta en el literal r) del artículo 70 de la ley N° 19.300, se cumplirán mediante oficio o visación de la Dirección de Presupuestos, la que podrá delegar tales facultades, total o parcialmente.

Las modificaciones que se incorporen a los contratos de concesión y los convenios en que se pacten las compensaciones que se deriven de dichas modificaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del decreto 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, se realizarán mediante decreto supremo fundado del Ministerio de Obras Públicas, dictado bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República", el que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda.

Las identificaciones que se deben efectuar en función del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, se harán por resolución de la Dirección de Presupuestos.

Las visaciones dispuestas en el artículo 5 de la ley N° 19.896 serán efectuadas por la subsecretaria o el subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en la secretaria o el secretario regional ministerial correspondiente.



ARTÍCULO 19.- Las personas encargadas de los programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratadas a honorarios tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico.

En el ejercicio de sus funciones tales personas deberán ajustar su labor al principio de probidad administrativa contemplado en las leyes.

ARTÍCULO 20.- Cuando los órganos y servicios públicos realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social deberán efectuarlos, al menos en el cuarenta por ciento, en medios de comunicación con clara identificación local, distribuidos territorialmente de manera equitativa. Este porcentaje no podrá destinarse a medios que sean parte de conglomerados, holdings o cadenas de medios de comunicación, con los que se relacionen en los términos de los artículos 99 y 100 de la ley N° 18.045, que tengan sedes o sucursales en más de una región.

Las obligaciones de publicación indicadas en el inciso precedente deberán sujetarse a lo señalado en el artículo 7 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285, y deberá ponerse a disposición, al menos, la siguiente información: monto total y desglose de los gastos en avisaje y publicidad, identificación de los proveedores (razón social y rut), tipo de medio de comunicación (televisión, radio, prensa u otro), identificación territorial (local, regional, nacional), pertenencia o no a un holding, conglomerado o cadena de comunicación. La mencionada información tenderá a publicarse en formato de datos abiertos y reutilizables, de forma que permita y facilite el acceso y la utilización de estos antecedentes por parte de los ciudadanos. Corresponderá al Consejo para la Transparencia impartir instrucciones sobre el cumplimiento de la obligación contenida en el presente inciso.

Los órganos y servicios públicos a que se refiere este artículo deberán remitir, a más tardar en marzo de **2027**, su planificación anual de avisaje y publicaciones al Ministerio Secretaría General de Gobierno, según el formato y los lineamientos que serán proporcionados oportunamente por dicho ministerio, el que hará un seguimiento del cumplimiento de la obligación establecida en el inciso anterior.



ARTÍCULO 21.- Los gastos en publicidad y difusión que podrán ejecutarse con cargo a cada Partida presupuestaria durante el año **2027** no podrán superar la suma fijada en el respectivo presupuesto.

Al respecto, en el mes de diciembre de **2026**, cada ministerio deberá enviar a la Dirección de Presupuestos la distribución de estos recursos, por Programa presupuestario. Dicha distribución será fijada respecto de cada Programa presupuestario mediante decreto del Ministerio de Hacienda, expedido bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Una copia de este decreto, totalmente tramitado, deberá ser enviada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

De igual forma, podrá aumentarse el monto asignado a un Programa presupuestario para gastos en publicidad y difusión, con cargo a la disminución de otro u otros, pero en ningún caso podrá aumentarse por esta vía el monto total fijado para la Partida.

Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar por los ministerios, delegaciones presidenciales regionales, delegaciones presidenciales provinciales, los gobiernos regionales y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley N° 19.896. En ningún caso podrán efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen.

Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquellos necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso a becas, subsidios, créditos, bonos, transferencias monetarias u otros programas o servicios; de orientación y educación de la población para situaciones de emergencia o alarma pública; y, en general, aquellos gastos que, debido a su naturaleza, resulten impostergables para la gestión eficaz de los mismos organismos.

Los organismos a que se refiere este artículo sólo podrán editar memorias y otras publicaciones por medios electrónicos. No podrán incurrir en gastos para la elaboración de artículos de



promoción institucional. El gasto por concepto de suscripciones a revistas, diarios y servicios de información, tanto en papel como por medios electrónicos de transmisión de datos, deberá limitarse al que sea estrictamente indispensable para el quehacer de los servicios.

ARTÍCULO 22.- Las comisiones de servicio en el país y en el extranjero deberán reducirse a las que sean imprescindibles para el cumplimiento de las tareas institucionales, especialmente aquellas en el extranjero, las que no podrán exceder de dos personas por actividad. Excepcionalmente, la Dirección de Presupuestos podrá autorizar al servicio una comisión de servicio mayor al número señalado, cuando le asistan motivos fundados.

Sólo el Presidente de la República y las ministras y los ministros de Estado en comisiones de servicio en el extranjero podrán ser acompañados por comitivas. En el caso de las ministras y los ministros, estas comitivas estarán compuestas por el máximo de un acompañante y sólo en caso de ser estrictamente necesario. En situaciones debidamente justificadas podrá asistir una segunda persona como acompañante, en cuyo caso deberá solicitarse una autorización previa a la Dirección de Presupuestos. Sin perjuicio de lo anterior, la Ministra o el Ministro de Relaciones Exteriores podrá ser acompañado por el máximo de tres personas.

Los servicios públicos deberán informar a la Dirección de Presupuestos, a partir de la publicación de esta ley y a más tardar el 31 de enero de **2027**, un plan anual de viajes al extranjero, el que deberá adecuarse al presupuesto aprobado en esta ley. Este plan de viajes al extranjero podrá ser modificado, en la medida que no implique un mayor gasto, y deberá informarse de ello a la Dirección de Presupuestos.

Las visitas de Estado, oficiales o de trabajo, en que el Presidente de la República o las ministras y los ministros de Estado convoquen como parte de la delegación a miembros del Congreso Nacional, a ministras y ministros de la Corte Suprema, a la Contralora o al Contralor General de la República o a otras autoridades superiores de la Administración del Estado, serán consideradas comisiones de servicio de interés para la política exterior del país. En ningún caso esto podrá significar duplicidad en el pago de viáticos.

ARTÍCULO 23.- Para todos los órganos y servicios públicos contenidos en esta ley la asignación de recursos a instituciones



privadas, provenientes de transferencias corrientes y de capital, salvo que la ley expresamente señale lo contrario o que sean asignaciones nominadas en esta ley, será el resultado de un concurso público abierto y transparente, que garantice la probidad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, y la igualdad y la libre concurrencia de los potenciales beneficiarios de la transferencia. Estas transferencias se materializarán previa suscripción de convenio y podrán realizarse en una o más cuotas según la finalidad del convenio.

El concurso y el convenio serán obligatorios para seleccionar a una institución privada ejecutora de política pública. Los concursos podrán no considerar soluciones específicas en sus bases.

Excepcionalmente, se permitirá la asignación de recursos sin concurso a instituciones privadas en los casos que a continuación se señalan:

a) Si en los concursos públicos respectivos no se presentaron interesados.

b) Si sólo existe una persona jurídica como posible beneficiario de los recursos o como su ejecutor.

c) En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados de conformidad a lo establecido en el inciso siguiente, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente.

En los casos señalados anteriormente deberá acreditarse la concurrencia de la circunstancia que justifica la asignación directa, mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad que asigne los recursos o de aquel a quien éste le haya delegado dicha facultad. Copia de dicha resolución deberá ser remitida al Consejo de Auditoría Interna de Gobierno o al organismo que lo reemplace, dentro de los 10 días siguientes a su dictación.

En casos graves, debidamente calificados según lo dispuesto en el convenio, el incumplimiento, ya sea de las disposiciones de esta ley o de los términos de los respectivos convenios, tendrá aparejada la imposibilidad de efectuar cualquier nueva transferencia de recursos públicos a la respectiva institución privada hasta que dicha situación sea subsanada. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución N° 2, de 2026, de



la Contraloría General de la República, o de la que la reemplace, y de la responsabilidad administrativa que pueda derivarse de este incumplimiento en el órgano responsable.

Las instituciones receptoras de fondos que no cumplan las obligaciones de la ley N° 19.862 no podrán recibir fondos públicos establecidos en esta ley hasta subsanar dicha situación. Los ministerios y servicios públicos deberán resguardar el registro de la información correspondiente de dicha ley. De igual forma deberán publicar la información relativa a las transferencias, en conformidad a lo dispuesto en las letras f) y k) del artículo 7 del artículo primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

Las disposiciones del presente artículo y los artículos 24, 25 y 26 siguientes, se aplicarán igualmente a aquellas transferencias corrientes y de capital que tengan una regulación propia para su asignación, incluso en los casos en que las transferencias se efectúen sin concurso por disposición de esta ley o de otro cuerpo normativo, en todo aquello en que no sean contradictorias.

ARTÍCULO 24.- Los convenios de transferencia a los que hace referencia el artículo anterior estarán sujetos a las siguientes obligaciones y prohibiciones, tanto cuando se trate de transferencias corrientes a instituciones privadas beneficiarias como a instituciones privadas ejecutoras de políticas públicas:

1. Deberán indicar el objeto social o fines que establecen los estatutos o el acta de constitución de la institución privada con la cual se suscriba el convenio. El objeto social se acreditará de manera previa a la suscripción del convenio de transferencia, y deberá ser pertinente con la actividad a desarrollar.
2. Deberán indicar las actividades específicas a desarrollar y/o los conceptos de gastos que se financiarán.
3. No podrán establecer compromisos financieros que excedan el ejercicio presupuestario, salvo que cuenten con la autorización previa de la Dirección de Presupuestos.
4. Deberán condicionar la suscripción del convenio al cumplimiento íntegro de las obligaciones establecidas en la ley N° 19.862.



5. Las rendiciones de cuentas se deberán realizar a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República. La incorporación al sistema, y las modalidades de uso se deberán realizar de acuerdo con las instrucciones que la Contraloría General de la República emita al efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones vigentes otorgadas por la Contraloría General de la República a determinados organismos públicos para el uso de sistemas digitales propios de rendición de cuentas.

Será responsabilidad de los órganos y servicios públicos velar por el buen uso de la plataforma y por la veracidad de la información que en ella se registre. Asimismo, será responsabilidad de dichos órganos y servicios, exigir que los receptores cumplan con la obligación de rendir cuentas, verificar el correcto uso de los recursos y exigir sus restituciones, si correspondiere.

Salvo que los respectivos convenios dispongan un plazo diferente, los organismos públicos tendrán el plazo máximo de tres meses para pronunciarse de manera fundada acerca de la rendición de cuentas otorgadas por las instituciones privadas respectivas.

6. Deberá acreditarse que el receptor ha cumplido con las obligaciones de rendir cuenta respecto de cualquier otro convenio suscrito con el órgano que efectúa la transferencia, en su caso.
7. Deberá incorporarse una cláusula que exija la restitución de los recursos transferidos en caso de que éstos sean destinados a una finalidad distinta de aquella para la cual fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o hayan sido observados o rechazados en el proceso de revisión de la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 25.- Además de los requisitos del artículo anterior, los convenios que se suscriban en que se establezcan transferencias de recursos a instituciones privadas ejecutoras de políticas públicas, deberán cumplir con lo siguiente:

- a) Sólo se podrán suscribir convenios con aquellas instituciones privadas que al momento de la postulación tengan a lo menos dos años de antigüedad contados desde su constitución, y que demuestren experiencia en el área de



ejecución del convenio. Para estos efectos, al momento de suscribir el convenio se deberá requerir un certificado de vigencia otorgado por el organismo competente en que se acredite la antigüedad de la institución. Asimismo, al momento de la postulación, se requerirán antecedentes que demuestren la experiencia de la institución privada o de los responsables del equipo de trabajo que ejecuten el proyecto asociado al convenio.

- b) Las instituciones privadas que suscriban convenios deberán constituir una o más garantías a favor del órgano de la Administración, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, cuando el total del monto de los recursos que se transfieran supere las 1.000 unidades tributarias mensuales.

Dichas garantías deberán consistir en vales vistas, boletas de garantía, pólizas de seguro, depósitos a plazo, certificados de fianza u otros instrumentos que permitan su cobro inmediato, y deberán ascender al cinco por ciento del monto total de los recursos a transferir. Para estos efectos, se considerará el valor de la unidad tributaria mensual correspondiente al mes de enero del año de suscripción del convenio de transferencia. Los costos financieros en que incurran las instituciones privadas con motivo del proyecto o iniciativa podrán ser considerados en los convenios de transferencias correspondientes.

- c) Si el Convenio considera el cumplimiento de hitos diferidos en el tiempo, deberán considerar, como condición a la transferencia de los recursos siguientes, el cumplimiento de los hitos anteriores relacionados con el objetivo para el que fueran asignados. Se podrán realizar anticipos por hasta el veinte por ciento, de conformidad a lo que establezca el convenio. Si es que la prestación carece de uno o más hitos específicos, se deberán establecer transferencias parceladas en el tiempo.
- d) Se podrá autorizar la subcontratación con terceros para las actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, las cuales deberán estar claramente precisadas en éste.

Excepcionalmente, se podrá autorizar la subcontratación del objeto principal del convenio cuando se advierta la



imposibilidad de darle cumplimiento. Para estos efectos, el jefe de servicio deberá emitir una resolución fundada que especifique las razones de la subcontratación. El convenio deberá incorporar todas las actividades, los montos y las instituciones que serán subcontratadas. En ningún caso, dicha subcontratación se podrá realizar con personas relacionadas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 100 de la ley N° 18.045. El convenio deberá incluir expresamente una cláusula que faculte al servicio para retener, de los pagos o sumas que correspondan al contratista, los montos que este adeude por obligaciones laborales o previsionales generadas durante la ejecución del convenio, con el exclusivo objeto de destinarlos al pago de los trabajadores o entidades previsionales acreedoras.

Se deberá enviar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley, a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado una copia de la resolución y el convenio de cada excepcionalidad.

- e) No se podrá fraccionar en distintos convenios la asignación de recursos a una misma institución privada, cuando éstos estén destinados a un mismo objetivo dentro de una región o a nivel nacional y, además, provengan de una misma asignación o programa presupuestario. Para estos efectos, deberá dejarse constancia en el convenio de la existencia de otros convenios suscritos por la institución privada con el mismo organismo y que se encuentren vigentes.

Los organismos públicos deberán publicar, dentro de los quince días corridos siguientes a la suscripción del convenio, el llamado a postulación, el acta de evaluación, el acto de adjudicación, el proyecto y presupuesto adjudicados y el convenio respectivo, de forma permanente y completa, en sus sitios de transparencia activa.

La obligación se extenderá a las instituciones privadas receptoras de transferencias superiores a 2.000 unidades tributarias mensuales, las que deberán publicar el proyecto, el presupuesto, el convenio, así como los estados financieros, balance y memoria anual institucionales; miembros del directorio y ejecutivos principales; remitiendo, además, dichos antecedentes al organismo público correspondiente para su publicación.

Asimismo, dentro de los treinta días siguientes al término de cada trimestre, los órganos y servicios públicos informarán



conforme a lo dispuesto en el artículo 35 sobre los convenios y colaboraciones vigentes o suscritos, las entidades participantes, los montos comprometidos y ejecutados, sus objetivos y el estado de avance material y financiero, incluyendo las principales dificultades y medidas adoptadas.

El Ministerio de Hacienda podrá impartir instrucciones complementarias de aplicación general respecto del contenido de los convenios, o de las reglas a que deben atenerse los concursos para su adjudicación. El jefe de servicio o la máxima autoridad del órgano respectivo velará por el íntegro cumplimiento de estas instrucciones.

ARTÍCULO 26.- Los organismos públicos receptores de recursos provenientes de transferencias, que deban reintegrarlos a rentas generales de la Nación, porque no han sido utilizados o por cualquier otro motivo, deberán hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente al cierre de la rendición de cuentas del respectivo convenio. El proceso de rendición de cuentas no podrá extenderse por más de seis meses contados desde la finalización de la ejecución del convenio.

Los receptores privados que se encuentren en la obligación de restituir recursos transferidos deberán hacerlo al organismo público correspondiente, dentro del plazo máximo de sesenta días hábiles contado desde el término del respectivo convenio. Luego de la recepción de los recursos, el organismo público deberá reintegrar dichos recursos a rentas generales de la Nación, a más tardar al mes siguiente de su recepción.

En el caso de los organismos públicos, se entenderá por recursos transferidos no utilizados, los saldos no utilizados al término de la ejecución de las actividades convenidas. Si se trata de instituciones privadas, serán los que se encuentren en dicha situación al término del respectivo convenio.

Si se trata de transferencias consolidables entre organismos del Sector Público, éstas podrán efectuarse sin necesidad de suscripción de un convenio por parte de los organismos involucrados, mediante resoluciones exentas de los respectivos jefes de servicio, sin perjuicio de su posterior envío a la Contraloría General de la República. Lo anterior, no obstante lo que dispongan las glosas aplicables de esta ley o de las facultades de las jefas y los jefes de servicio en este sentido.

Los convenios de transferencias a municipalidades deberán incluir la información de las contrataciones de personal que



vayan a celebrar para el cumplimiento del objeto del convenio, así como su calidad jurídica.

Los convenios de transferencia deberán regular el destino de los bienes muebles adquiridos con cargo a los recursos transferidos, al término de la ejecución de los programas.

Con autorización previa de la Dirección de Presupuestos los órganos públicos podrán comprometer transferencias a otros órganos del Sector Público que excedan el ejercicio presupuestario.

ARTÍCULO 27.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 19.880, las autoridades, los funcionarios públicos y el personal contratado sobre la base de honorarios, no podrán participar o intervenir en modo alguno en el proceso de concursabilidad, adjudicación o suscripción de un convenio, cuando se encuentren en las siguientes situaciones:

1. Cuando tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad inclusive, o tengan hijo o hija en común, con los miembros del directorio o de los ejecutivos o administradores principales de una institución privada que forme parte de un proceso concursal.
2. Cuando hayan trabajado, prestado servicios remunerados o no, o desempeñado labores directivas en una institución privada que forme parte de un proceso concursal, en los dos años inmediatamente anteriores contados desde que asumieron el cargo público que desempeñan.
3. Cuando hayan emitido opinión, por cualquier medio, sobre un procedimiento concursal en curso y cuya resolución de adjudicación se encuentre pendiente.

En el acta o las actas que se levanten durante el proceso concursal deberá dejarse constancia de la nómina de los funcionarios públicos y del personal contratado sobre la base de honorarios que intervinieron en éste.

ARTÍCULO 28.- Los órganos y servicios públicos regidos por esta ley, cuando cuenten con asignaciones de transferencias corrientes al sector privado, a otras entidades públicas, y a instituciones privadas ejecutoras de política pública, o bien, de capital al sector privado, y a otras entidades públicas, destinadas al mismo objeto y con la misma denominación, podrán



efectuar procesos de asignación de estos recursos en forma conjunta, e imputar el gasto a los ítems 01, 03 y 08 según corresponda. Para estos efectos, mediante decreto de modificación presupuestaria dictado con posterioridad a la adjudicación, se deberá regularizar la asignación de los recursos asociados a estas transferencias. La asignación de estos recursos en ningún caso podrá superar la suma de los ítems involucrados en conjunto.

Los órganos y servicios públicos regidos por esta ley que ejecuten programas públicos que formen parte de su oferta programática y que se financien con cargo a asignaciones correspondientes a distintos subtítulos, pertenecientes a uno o más programas presupuestarios, deberán remitir a la Dirección de Presupuestos la ejecución mensual de dichos programas, desagregada, a lo menos, a nivel de asignación, a más tardar el día 15 del mes siguiente.

Durante el mes de enero de 2027, la Dirección de Presupuestos, mediante resolución, individualizará los programas comprendidos en el inciso anterior, de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo, y determinará el formato, los medios y las especificaciones técnicas para la remisión de la información.

ARTÍCULO 29.- Los actos y contratos que se hayan ejecutado y celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y cuya imputación presupuestaria esté afecta a una asignación, ítem o subtítulo distinto de aquel que corresponde de acuerdo con el presente ordenamiento, continuarán produciendo sus efectos hasta su terminación con cargo a la asignación, ítem o subtítulo que corresponda de acuerdo con esta ley.

ARTÍCULO 30.- El arriendo de infraestructura para realizar actividades institucionales, tales como reuniones, jornadas de planificación u otras similares, sólo deberá autorizarse en la medida que el servicio respectivo no cuente con infraestructura propia para ello, ni que le pueda ser facilitada por otro servicio público.

Los servicios públicos deberán efectuar las gestiones que sean necesarias para recuperar, desde las instituciones de salud previsual, los montos correspondientes a los subsidios por licencias médicas. El devengamiento asociado a la recuperación de licencias médicas de beneficiarios de ISAPRE deberá realizarse dentro del mes siguiente al que se presentó dicha situación. Además, el servicio público deberá realizar todas las



gestiones para percibir dicho íntegro en el plazo máximo de cuarenta y cinco días corridos contado desde la fecha de pago de la respectiva remuneración mensual e ingresarlos a rentas generales de la Nación. Para tales efectos, la Tesorería General de la República emitirá instrucciones técnicas generales para materializar estos procesos. Corresponderá a las unidades de auditoría interna de cada repartición la verificación del cumplimiento estricto de lo dispuesto en este inciso, y deberán informar trimestralmente de ello al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

Lo dispuesto tanto en el artículo 22 como en los incisos anteriores también le será aplicable, en lo pertinente, a las empresas del Estado, incluidas Televisión Nacional de Chile, la Corporación Nacional del Cobre de Chile y el Banco del Estado de Chile, y a todas aquellas sociedades en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento.

Los instructivos sobre buen uso de los recursos fiscales, que dicten el Presidente de la República o el Ministerio de Hacienda, serán obligatorios para los órganos de la Administración Central del Estado y para los gobiernos regionales. Los demás organismos y entidades reguladas por esta ley podrán adherirse a estas instrucciones o dictar otras que tiendan al mismo objetivo, lo cual deberá ser informado a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

ARTÍCULO 31.- El Ministerio de Hacienda podrá impartir instrucciones generales en materias de presupuesto de caja, endeudamiento, personal y proyectos de inversión; y específicas, en materias de viajes al exterior, gastos de publicidad y de responsabilidad empresarial, aplicables a todas las empresas del Estado, incluidas Televisión Nacional de Chile, la Corporación Nacional del Cobre de Chile y el Banco del Estado de Chile, y a todas aquellas sociedades en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento.

Las instrucciones que la Dirección de Presupuestos imparta en virtud de este artículo permanecerán vigentes durante el ejercicio presupuestario 2027 y serán aplicables en todo aquello que resulte compatible con este artículo, mientras no sean modificadas, sustituidas o dejadas sin efecto por dicha Dirección.



Copia de estas instrucciones será enviada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos a más tardar treinta días después de que sean emitidas.

ARTÍCULO 32.- Los funcionarios públicos regulados por la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, el Presidente de la República, ministras y ministros de Estado, subsecretarias y subsecretarios, gobernadoras y gobernadores regionales, delegadas y delegados presidenciales regionales y jefas y jefes superiores de los servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, no tendrán derecho a percibir dieta o remuneración por integrar consejos o juntas directivas, presidencias, vicepresidencias, directorios, comités u otros equivalentes con cualquier nomenclatura, de empresas o entidades públicas que incrementen la remuneración correspondiente a los cargos regulados por las leyes señaladas.

ARTÍCULO 33.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los organismos públicos comprende todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno de éstos, mediante decreto dictado en la forma dispuesta en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975, con cargo a la disminución de la dotación máxima de otros de dichos u organismos, sin que pueda ser aumentada en caso alguno la dotación máxima del ministerio, servicio u organismo de que se trate. El decreto supremo respectivo dispondrá el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir su dominio, y deberán inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación.

ARTÍCULO 34.- Los órganos y servicios públicos del Gobierno Central incluidos en esta ley podrán efectuar pagos imputables al Subtítulo 34, ítem 07, Deuda Flotante, así como giros imputables al Subtítulo 25, ítem 99, Otros Integros al Fisco, y excederse de las sumas ahí fijadas, en los términos señalados en el artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de 1975.



Los excesos que se produzcan conforme a este artículo serán sancionados posteriormente mediante decretos del Ministerio de Hacienda que se dicten en la forma dispuesta en el artículo 70 del citado decreto ley.

ARTÍCULO 35.- Toda información que, de acuerdo con lo establecido en los artículos de esta ley y en las respectivas glosas, deba ser puesta a disposición por cualquier órgano de la Administración del Estado, principalmente por los ministerios y la Dirección de Presupuestos, a las diversas instancias del Congreso Nacional, se proporcionará sólo a través de una plataforma electrónica administrada en conjunto por el Congreso y la Dirección de Presupuestos. La obligación del organismo respectivo se entenderá cumplida por el sólo hecho de cargar la información correspondiente en la señalada plataforma.

Para dar cumplimiento a lo señalado en este artículo, la información indicada deberá ser puesta a disposición por los organismos correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto por la Dirección de Presupuestos.

La información deberá ser proporcionada en formato digital y procesable por software de análisis de datos, es decir, en planillas de cálculos o archivos de texto plano, con la desagregación requerida.

Dicha plataforma deberá encontrarse disponible para su uso a más tardar el 31 de julio de 2027.

Durante el período en que la plataforma no se encuentre operativa, los deberes de remisión de información deberán cumplirse, dentro de los plazos respectivos, mediante oficio dirigido a la instancia del Congreso Nacional señalada en esta ley o en la glosa correspondiente. Si no se indicare una instancia destinataria, la información se remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Lo anterior no alterará las obligaciones de publicación que correspondan.

Asimismo, todo deber de información que no señale una fecha de entrega deberá ser cumplido antes del comienzo de la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año siguiente.

Toda información que se proporcione a través de la plataforma será notificada automáticamente por ésta a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Biblioteca Nacional y a las



comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y del Senado cuyas materias de competencia se relacionen con la Partida respectiva, dentro del plazo de treinta días contado desde su recepción; dándose por cumplido el deber del servicio de informar para todos los efectos legales.

El incumplimiento de cualquiera de los deberes de información contenidos en esta ley dará lugar al procedimiento y las sanciones que establece el artículo 10 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Para dicho efecto, y a solicitud de cualquier diputado o senador, el Presidente de la Cámara de Diputados o del Senado remitirá los antecedentes a la Contraloría General de la República. De dicha acción deberá darse cuenta en la respectiva sesión.

ARTÍCULO 36 Autorízase al Fisco para postergar a contar de la fecha de publicación de esta ley y hasta su vigencia, el cumplimiento íntegro de la obligación contenida en el artículo tercero transitorio de la ley N° 21.174, que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, respecto del traspaso de saldos al Fondo de Contingencia Estratégico.

Lo dispuesto en el inciso anterior no afectará en modo alguno el cumplimiento de las obligaciones que se pudieran derivar de la aplicación del artículo 102 de la ley N° 18.948.

ARTÍCULO 37.- Para los efectos de los gastos reservados asignados para el año 2027, el informe escrito de la Contraloría General de la República, que en virtud del inciso tercero del artículo 4 de la ley N° 19.863 deberá suscribirse en conjunto por la jefa o jefes de servicio y las jefas o jefes de las unidades operativas que tengan a su cargo gastos reservados, deberá contar además con el visto bueno del ministro o ministra respectivo, incluidos para estos efectos la Subsecretaría del Interior, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y las Subsecretarías de Defensa y de las Fuerzas Armadas.

El informe a que se refiere deberá contar con la información suficiente para permitir a la Contraloría General de la República verificar que se ha dado cumplimiento a los fines establecidos en el artículo 2 y a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley N° 19.863.



ARTÍCULO 38.- Durante el año **2027** la suma de los montos involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren las entidades autorizadas en el artículo 5 de la ley N° 19.908 no podrá exceder de US\$24.000.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma legal.

ARTÍCULO 39.- Ante la ocurrencia de una emergencia, desastre o catástrofe declarada según las disposiciones de la ley N° 16.282, en virtud de la cual se requieran recursos con el objeto de financiar la etapa de rehabilitación definida en la ley N° 21.364, las solicitudes de los diferentes servicios públicos deberán ser coordinadas por la Subsecretaría del Interior.

Para lo anterior, la Subsecretaría del Interior coordinará un Comité de Ayudas Tempranas, el que estará integrado por la Subsecretaría de Servicios Sociales y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Este comité tendrá por objeto proponer el plan del Gobierno Central en ayuda inmediata a los afectados. Este plan será presentado a la Dirección de Presupuestos para aprobar su financiamiento.

En el caso de que se requieran recursos para financiar la etapa de reconstrucción definida en la ley N° 21.364, las solicitudes de los diferentes servicios públicos deberán ser coordinadas por el Ministro del Interior.

Para lo anterior, el Ministro del Interior presidirá el Comité de Reconstrucción, integrado por los Ministros de Desarrollo Social y Familia, de Hacienda, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, y de Agricultura; el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, y cualquier otro ministerio y/o servicio público que tenga competencia en la respectiva reconstrucción. Este Comité tendrá por objeto elaborar los planes y estrategias de reconstrucción; coordinar, adoptar y comunicar, según corresponda, las medidas tendientes a la ejecución de dichos planes y estrategias. Los planes serán presentados al Ministerio de Hacienda para aprobar su financiamiento e informados al Presidente de la República.

La integración y el funcionamiento de este Comité se regularán, además, mediante decreto supremo del Ministerio del Interior.



Mientras no se dicte el decreto supremo señalado en el inciso precedente, continuará rigiendo, en todo lo que sea compatible con lo dispuesto en los incisos anteriores, el decreto supremo N° 2, de 2024, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entendiéndose que las referencias que este efectúa al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o al Ministro de dicha cartera, incluidas las relativas a la constitución y presidencia del Comité, se refieren al Ministerio del Interior y al Ministro del Interior. Una vez que entre en vigencia el decreto supremo del Ministerio del Interior a que se refiere el inciso tercero, el decreto supremo N° 2, de 2024, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quedará sin efecto.

Asimismo, ante situaciones de emergencia declaradas según las normas sectoriales pertinentes, las asignaciones presupuestarias habilitadas para la respuesta, tales como la Asignación Para Atender Situaciones de Emergencia de la Subsecretaría del Interior, la Asignación Emergencias Agrícolas de la Subsecretaría de Agricultura, la Asignación Emergencias del Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Asignación Emergencias Sanitarias del Servicio Agrícola y Ganadero y la Asignación Programas Especiales del Servicio de Cooperación Técnica, podrán eximirse de la aplicación de los artículos 23, 24, 25 y 26. Los planes y estrategias vigentes serán publicados en el sitio electrónico del Ministerio de Hacienda y se informará su contenido y ejecución mensual conforme lo señalado en el artículo 35.

En situaciones de emergencia, desastre o catástrofe declaradas según las disposiciones de la ley N° 16.282, el Ministerio de Obras Públicas podrá intervenir infraestructura vial y de canales de propiedad privada, previa información a el o los propietarios.

En materia de proyectos de fomento productivo, conservación y reconstrucción de infraestructura dañada producto de las mismas ocurrencias señaladas en el inciso anterior, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Hacienda dispondrán un procedimiento abreviado para la declaración de admisibilidad de las iniciativas. Dicho procedimiento deberá estar publicado a más tardar el 31 de enero de 2027.

ARTÍCULO 40.- El traspaso del servicio educacional, regulado por el artículo octavo transitorio de la ley N° 21.040, desde las municipalidades y corporaciones municipales que correspondan, a los Servicios Locales de Educación Pública



señalados en el Capítulo III, Títulos I (Litoral), VII (Los Cerezos), IX (Los Copihues), XI (Chacabuco) y XII (Los Viñedos); del decreto N° 162, de 2022, del Ministerio de Educación, y sus modificaciones, no se producirá el año 2027.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente de la República, mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, dictado bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República", podrá crear, suprimir o modificar los Capítulos, Programas, Subtítulos, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

ARTÍCULO 41.- El Ministerio de Hacienda mantendrá una plataforma informática en la que publicará la información detallada sobre los recursos asignados, su ejecución mensual a nivel transaccional para los organismos que conforman el Gobierno Central y los respectivos respaldos documentales. Se publicará esta información en forma detallada por regiones, así como los principales receptores de recursos y proveedores del Estado.

ARTÍCULO 42.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 6° del decreto ley N° 1.263, de 1975, y a fin de garantizar criterios de buena administración en función de la liquidez de recursos disponibles, se habilita a los órganos y servicios públicos para disponer de la caja resultante de la totalidad de los recursos autorizados por la presente ley, así como los correspondientes a sus ingresos propios para el financiamiento de cualquiera de sus conceptos de gasto. Lo anterior en caso alguno supondrá que los referidos recursos se destinen a fines distintos a los establecidos por la ley, sino que garantiza atender de manera más eficaz y eficiente las necesidades de los órganos o servicios públicos de que se trate.

ARTÍCULO 43.- Los profesionales de la educación dependientes de sostenedores o administradores regidos por el Párrafo Tercero de las disposiciones transitorias de la ley N° 20.903 que no hayan pasado a regirse por el Título III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, a la fecha de publicación de la presente ley, lo harán en forma obligatoria a contar de julio de 2027, en lugar del momento dispuesto por el artículo trigésimo transitorio de la ley N° 20.903. Lo anterior, es sin perjuicio del derecho consagrado en el artículo vigésimo cuarto transitorio de la misma ley.

Serán exceptuados de lo dispuesto en el inciso anterior aquellos profesionales de la educación que hayan rendido los



instrumentos de evaluación contemplados en el artículo 19K del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, en el proceso de evaluación docente del año 2027 o en años anteriores, y que además sean reconocidos en la resolución que establece el artículo 19Q del referido decreto con fuerza de ley.

ARTÍCULO 44.- Los sostenedores de los establecimientos educacionales que hayan percibido la subvención escolar preferencial regulada en la ley N° 20.248 y que, conforme a lo registrado por la Superintendencia de Educación, cuenten con saldos acreditados o no acreditados derivados de Convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que hayan expirado entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, deberán presentar al Ministerio de Educación un Plan de Ejecución y Recuperación de Saldos, en adelante "el Plan", a más tardar el 30 de abril de 2027. Mediante resolución del Ministerio de Educación, visada por la Dirección de Presupuestos, que podrá dictarse desde la fecha de publicación de esta ley, se determinarán el contenido mínimo del Plan, las acciones que podrán comprometerse, entre las cuales se considerarán las señaladas en los literales a) a e) del inciso tercero del artículo 47 de la ley N° 21.796 y otras que tengan por objeto el mejoramiento de la calidad de la educación o los fines educativos establecidos en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación; y el plazo para su ejecución, el que no podrá exceder el 31 de diciembre de 2027, así como el plazo y la forma simplificada de rendición de cuentas, el que no podrá exceder el 31 de marzo de 2028.

El Ministerio de Educación deberá dictar una o más resoluciones que individualicen a los sostenedores que no presenten el Plan dentro del plazo indicado en el inciso primero, o bien, lo presenten por sólo parte de los saldos registrados. Dichas resoluciones deberán dictarse a más tardar en el mes de mayo de 2027, y establecerán el monto que deben reintegrar. El sostenedor que no presente el Plan o presente uno por sólo parte de los saldos registrados, deberá reintegrar dichos saldos, en una sola cuota, al Ministerio de Educación, a través de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales, dentro de treinta días hábiles a partir de la fecha en que se le notifique la resolución, la que podrá ser notificada de acuerdo a las reglas generales, o mediante correo electrónico u otra plataforma que usualmente el Ministerio de Educación utilice.



Asimismo, el Ministerio de Educación deberá dictar una o más resoluciones que dejen constancia de la presentación del Plan, por el total o parte de los saldos registrados, según corresponda. En caso de que el sostenedor incumpla total o parcialmente el Plan, deberá reintegrar al Ministerio de Educación, a través de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales, a más tardar el 30 de junio de 2028, en una sola cuota, la totalidad de los montos no ejecutados. Para ello el Ministerio de Educación dictará una resolución que declare el incumplimiento total o parcial, fijando el monto a reintegrar.

Las resoluciones señaladas en los incisos segundo y tercero tendrán mérito ejecutivo. La acción se deducirá ante el tribunal ordinario competente, se someterá a las normas del juicio ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil, prescribirá en el plazo de tres años desde la fecha en que se haga exigible, y podrá, en todo caso, subsistir como una acción de cobro ordinaria.

Sin perjuicio de lo establecido en incisos anteriores, en el caso de los municipios y corporaciones municipales que deban reintegrar los saldos registrados, dichos montos podrán ser descontados, luego de ser debidamente reajustados, de los recursos que a la municipalidad respectiva le corresponda percibir por su participación en el Fondo Común Municipal, establecido en el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior. Para dichos efectos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo podrá determinar, a través de una resolución exenta de carácter general o particular, el número de cuotas en que se reintegrarán durante el año 2027 a rentas generales de la Nación los montos correspondientes. Asimismo, mediante resolución del Ministerio de Educación, podrán ser descontados los montos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública que le corresponda al respectivo Municipio. Lo dispuesto en este inciso será aplicable también respecto de los saldos que deban reintegrarse de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 de la ley N° 21.796.

A más tardar el 31 de marzo de 2027 la Superintendencia de Educación deberá informar al Ministerio de Educación y a la Dirección de Presupuestos los saldos de arrastre que existan en los Convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa vigentes. Dicha información deberá ser desagregada por sostenedor, indicando además la fecha de vigencia de los convenios y la fecha de origen de aquellos saldos.



Artículo 45.- Los ministerios y servicios públicos no podrán realizar celebraciones generales ni de aniversarios que impliquen desembolsar gasto fiscal, con excepción de las embajadas y consulados en el extranjero para la conmemoración del día de la independencia nacional y de aquellos organismos que celebren su primer centenario.

Artículo 46.- A más tardar el 15 de enero de **2027**, los jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de los servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, deberán informar a la Dirección de Presupuestos, sobre los procedimientos disciplinarios instruidos por uso indebido de licencias médicas, desde el mes de mayo del año **2025** en adelante. Dicho informe deberá contener, a lo menos, la siguiente información actualizada al 31 de diciembre de **2026**:

1. Número de funcionarios que presentaron su renuncia antes de instruirse un procedimiento disciplinario en su contra.
2. Número de procedimientos disciplinarios instruidos.
3. Número de funcionarios con procedimiento disciplinario instruido.
4. Duración promedio de la o las licencias, expresada en días corridos, que se investigan.
5. Remuneraciones promedio de los funcionarios objeto del procedimiento disciplinario, expresadas como remuneración bruta mensualizada durante el periodo en que se le extendió la o las licencias que se investigan.
6. Número de funcionarios cuyos procedimientos disciplinarios se encuentran en etapa de investigación.
7. Número de funcionarios cuyos procedimientos disciplinarios se encuentran con vista de fiscal emitida.
8. Número de funcionarios cuyos procedimientos disciplinarios fueron resueltos por el Jefe Superior del Servicio.
9. Número de funcionarios a quienes se les aplicó la medida disciplinaria de censura.
10. Número de funcionarios a quienes se les aplicó la medida disciplinaria de multa.
11. Número de funcionarios a quienes se les aplicó la medida disciplinaria de suspensión del empleo.
12. Número de funcionarios a quienes se les aplicó la medida disciplinaria de destitución.
13. Número de funcionarios absueltos de los cargos formulados en el procedimiento disciplinario.



14. Número de funcionarios que impugnaron la resolución que aplica medida disciplinaria.
15. Número de funcionarios cuya resolución de término del procedimiento disciplinario fue enviada a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, según corresponda.
16. Número de funcionarios cuya resolución de término del procedimiento disciplinario se encuentra ejecutoriada.
17. Toda otra información que solicite la Dirección de Presupuestos.

A más tardar el 30 de enero de **2027**, la Dirección de Presupuestos enviará, de acuerdo con lo indicado en el artículo 35 de la presente ley, un informe consolidado sobre el estado de los procedimientos disciplinarios instruidos por uso indebido de licencias médicas, con la información a que se refieren los numerales anteriores.

Los órganos y servicios públicos indicados en el inciso primero, el Poder Judicial y el Congreso Nacional deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos, a la Contraloría General de la República y a las Comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados lo indicado en los numerales anteriores, junto con los descuentos aplicados a los funcionarios por el uso indebido de licencias médicas. Para estos efectos, todos los organismos involucrados deberán dar cumplimiento al deber de coordinación establecido en el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

ARTÍCULO 47.- Para todos los efectos de esta ley, la obligación de informar o proporcionar los antecedentes recaerá en la autoridad, jefe o superior del servicio señalado conforme al artículo 16 de la ley N° 20.285. En caso de incumplimiento, se les aplicarán las sanciones previstas en el artículo 45 de dicha ley.

ARTÍCULO 48.- Los estudios básicos, programas y proyectos de inversión y cuya ejecución continúe en el presente ejercicio, mantendrán tanto la identificación presupuestaria efectuada el año inmediatamente anterior como la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dándose por cumplidos los requisitos establecidos en los incisos cuarto y quinto del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975.



Asimismo, aquellas iniciativas de inversión que consideren exclusivamente la conservación de infraestructura pública sólo requerirán ingresar al Sistema Nacional de Inversiones para dar por cumplido lo señalado en el inciso cuarto del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975; lo que será reglado mediante instrucciones dictadas por el Ministerio de Hacienda. En tanto no se hayan dictado estas instrucciones, seguirán rigiendo las actualmente vigentes.

ARTÍCULO 49.- Todo proyecto de infraestructura menor emplazado en zonas rurales o en localidades concentradas o semidispersas con una población inferior a 5.000 habitantes, y cuyo monto total de inversión sea inferior a 30.000 UTM, podrán evaluarse mediante un procedimiento simplificado -establecido en instrucciones dictadas por el Ministerio de Hacienda- exceptuándose de lo señalado en el inciso cuarto del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Estas iniciativas deberán ingresarse al Banco Integrado de Proyectos en conjunto con las evaluaciones señaladas y obtener un código "bip" para su identificación.

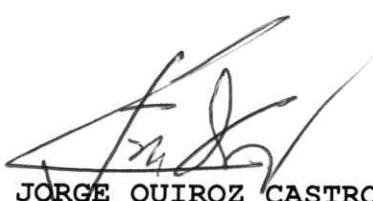
ARTÍCULO 50.- Las obras públicas adjudicadas por trato directo o licitación privada cuyo monto total no exceda de 30.000 UTM, o por licitación pública cuyo monto total no exceda de 75.000 UTM, podrán iniciarse materialmente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y en la normativa aplicable, desde la notificación del acto administrativo adjudicatorio. En estos casos, serán remitidos a la Contraloría General de la República para su registro en un plazo no superior a 10 días, sin perjuicio del control de reemplazo que pueda desarrollar para estos efectos.

ARTÍCULO 51.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del año 2027, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos, resoluciones y convenios que en virtud de ella sean necesarios para posibilitar la ejecución presupuestaria. Esta ley y las instrucciones para su ejecución podrán ser publicadas en su integridad para su distribución.

Dios guarde a V.E.,




JOSÉ ANTONIO KAST RIST
Presidente de la República


JORGE QUIROZ CASTRO
Ministro de Hacienda


30/09/2026


OFICINA
CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES
CHILE
30-09-2026
18:48
VIRTUAL

